

17ª REUNION — Continuación de la 13ª SESION ORDINARIA (Especial)

AGOSTO 1º DE 1973

Presidencia de los señores diputados Salvador F. Busacca e Isidro J. Odena

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavía

Prosecretario: señor Manuel Rodríguez González

En ejercicio del Poder Ejecutivo
nacional:

RAÚL ALBERTO LASTIRI

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis
ACUNA, Hipólito
AGUIRRE, Mario D.
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
AMADO SALEME, José
AMAOLO, Mario O.
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARATA, Juan Carlos
ARBO, Tomás Ameghino
ARCE, Rodolfo Juvenio
ARIANI, Adriano
ARIGÓS, Ramón Eduardo
ARRAYA, Jorge Francisco
ARRÚE, Willebrordo
ASMAR, Ramón
AUYERO, Carlos Alberto Camilo
ÁVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BAJICZMAN, Raúl I.
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio D.
BARRIONUEVO, Roque R.
BARTOMIOLI, Héctor Luis
BEHERAN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto
BLANCO, Manuel
BONAS, Abraham Efraim
BONIFATTI, Arolinda S. A.
BORRAS, Raúl Antonio
BRAVO, Carlos Alberto
BRAVO, Federico S.
BRITO LIMA, Alberto
BUSACCA, Salvador F.
BUSTOS, Tomás Roberto
CABANA, Manuel I.
CABEZAS, José Humberto
CALABRESE, Pablo
CAMPBELL, Oscar S.
CAMUS, Jorge M.
CAPILLO, José
CARDENAS, Juan Carlos

CARRAL TOLOSA, Humberto
CARRERAS, Ruperto R.
CASAZZA, Luis Angel
CATALANO, José Armando
CITATI, Angel
COLELLO, Clemente J.
COSSY ISASI, Edgar
COSTARELLI, José
CROATTO, Armando Daniel
CROCCO, Luis Fernando
CHIAQUÍREZ de PALACIOS, María
D'ANGELO, Lorenzo Francisco
DAVICO, Miguel Angel
DAY, Alberto Ricardo
DE APARICI, Ricardo José Manuel
DE LUCA, Ricardo
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo
DÍAZ ORTIZ, Santiago Francisco
EGUIREUN, Enrique
ESPECHE, Juan Bautista
ESPONDABURU, Raúl Horacio
ESQUIVEL, Faustino
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FALÚ, Ricardo Munir
FARIAS, Eduardo Isidro
FERNANDEZ, Dante Dionisio
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano
FERNANDEZ GILL, Guillermo Carlos
FERNANDEZ VALONI, José Luis
FERREYRA, Jorge Washington
FLORES, José María F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FRESCHI, Pedro José
FUENTES, Pedro Alfredo
GAITAN, Adelmo Alberto
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Carlos R.
GANEM, Héctor
GARCÍA, Luis Antonio
GARONA, Alberto A.
GARRÉ, Nilda Celia
GASS, Adolfo
GIMENEZ, Nicolás Alberto
GLELIEL, Jorge
GOLE, Tomás Juan B.
GONZALEZ, Ricardo A.
GRAU, Mario Agustín
GUALCO, Jorge Nelson
GUERRERO, Antonio Isaac

GUZMAN de ANDREUSSI, María Cristina
HAIEK, José
HUEYO, Horacio
HUGHES, Gilbert
IMBAUD, Carlos Alfredo
INSUA, Carlos Raúl
ITURRIETA, Anibal A.
KELLY, Rodolfo Feliciano
KUNKEL, Carlos Miguel
LABARE, Juan Gabriel
LATRUBESSE, Francisco Alberto
LAVALLE, Mario
LAZZARINI, José Luis
LENCINA, Luis A.
LEPEZ, Lysis Augusto
LIMA, Hugo Ramón
LITERAS, María Haydée A. de
LOPEZ, Domingo
LOPEZ, Horacio Fidel
LOPEZ, Miguel Angel
LÓPEZ de GALLO, Amelia
LORENCES, Mariano Rufino
LUCENA, Luis Arnaldo
LUMELLO, José Elio
LLANO, Juan Pedro
LLORENS, Roberto Oscar
MACRES, Antonio J.
MALDONADO, Clemente
MARINO, Rafael Francisco
MARQUEZ, Alfonso Carlos
MARTÍNEZ, Juan Antonio
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás
MASSOLO, Eduardo A. R.
MAUHUM, Fernando Hugo
MERA FIGUEROA, Julio I.
MERCHENSKY, Marcos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIGUEL, Pedro Honorio
MIRA, Jesús
MOLINA, Gilberto H.
MOLINA, Manuel Isaura
MOLINA ZAVALIA, Armando
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto
MOMBELLI, Fausto J.
MONACO, Horacio Miguel
MONSALVE, Evaristo A.
MONTERO TELLO, Régulo L.
MORAL, Angel
MORENO, Antonio E.
MORENO FERRER, José Carlos W.
MORINI, María Teresa Merciadri de
MOYANO, Francisco J.

MUNIZ BARRETO, Diego
 MUSACCHIO, Vicente Miguel
 MUSSO, Eufemia
 NARANJO, Decio B.
 NATALE, Ricardo T.
 NICOLICHE, Lisardo Oscar
 NOSIGLIA, Plácido Enrique
 ODEÑA, Isidro J.
 OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio
 PALACIO DEHEZA, Carlos
 PARENTE, Rodolfo Domingo
 PASCUAL, Paulino Rubén
 PATALAGOITIA, Osvaldo E.
 PAZ, Guido Ulises
 PEDRINI, Ferdinando
 PEREIRA, Antonio
 PETRUCCELLI, Agustín
 PONCE, Rodolfo Antonio
 PORTERO, Héctor
 PORTO, Jesús E.
 RABANAL, Rubén Francisco
 RACCHINI, Juan Nicolás
 RAFAEL, Juan
 RAMÍREZ, Juan Manuel
 RATTI, Luis Carlos
 RITVO, Miguel
 RIZO, Eusebio Victor
 RODRIGUEZ, Alfredo S.
 RODRÍGUEZ FLORES, Argentina
 ROJAS, Ramón Pablo
 ROLANDO, Esteban Domingo
 ROMÁN, Irene Graciela
 ROMERO, Carlos Alberto

ROMERO, Juana N.
 ROSAS, Alberto Horacio
 ROTA, Silvana María I.
 RUBEO, Luis
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo
 SALIM, Luis
 SALOMÓN, Jorge
 SALVADOR, Nicolás
 SALVATIERRA, Julio Domingo
 SAMBUEZA, Osvaldo
 SANCHEZ AHUMADA, Luis Alberto
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio
 SANDLER, Héctor Raúl
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo
 SANGUINETI, Virginia Luisa
 SARBOLI, Rubén Juan
 SARLI, Osvaldo Raúl
 SAÚL, Roberto
 SERVINI GARCÍA, Clara Cristina
 SILEONI, Nelo I.
 SILVA, Anacleto
 SLAMOVITS, Ludovico
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOLANA, Jorge D.
 STECCO, Alberto Eleodoro
 SUÁREZ, Humberto F.
 SUAREZ, Leopoldo M.
 SUELDO, Horacio Jorge
 SULETA DE ARRAYA, Arminda
 SVRSEK, Enrique A.
 TACHELLA, Eliberto S. J.
 TAGLIAFERRO, Jorge
 TOLLER, Roberto Lino

TRABOLSI, Eduardo Elias
 TRÓCCOLI, Antonio A.
 TULA DURAN, Joaquín
 URDÍNEZ de VOLPE, Clotilde Isolina
 VACCAREZZA, Eduardo H.
 VALENZUELA, Héctor R.
 VALERI, Salvador
 VAZQUEZ POL, José
 VERGARA, Roque Antonio
 VESCO, José Luis
 VIALE, Jorge Omar
 VIDANA, Roberto
 VILLALBA, Bernardo Samuel
 VINARDELL MOLINERO, Miguel
 VINTI, Carmelo
 VITTAR, Rodolfo Oscar
 ZAMANILLO, José Miguel
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

AUSENTES. CON LICENCIA:

BARTOMIOLI, Héctor Luis
 CASTELLANO, Hugo Luis
 COMÍNGUEZ, Juan Carlos

AUSENTES. CON AVISO:

CAMPOS, Ernesto Manuel
 FERNÁNDEZ, Juan Máximo
 HARRINGTON, Luis José D.
 MARTOS, Mario Saúl
 MASTOLORENZO, Vicente

AUSENTE, CON PERMISO:

VILLADA, Mario Anselmo

SUMARIO

- 1.—Consideración del despacho de las comisiones de Finanzas y de Legislación General en el proyecto de ley, en revisión, sobre nacionalización de depósitos bancarios. (Pág. 1229.)
- 2.—Comunicado de la Presidencia de la Honorable Cámara relacionado con una nota y memorandos remitidos por el encargado de negocios de los Estados Unidos al señor ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación. (Pág. 1237.)
- 3.—Continúa la consideración del despacho a que se refiere el punto 1 de este sumario. Se sanciona definitivamente. (Pág. 1237.)
- 4.—Consideración del despacho de la Comisión de Finanzas en el proyecto de ley, en revisión, sobre incorporación de directorios regionales a la estructura orgánica del Banco de la Nación Argentina y del Banco Nacional de Desarrollo. Se sanciona definitivamente. (Pág. 1251.)
- 5.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley sobre régimen para la radicación de capitales extranjeros. (Pág. 1252.)
- 6.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Pedrini relacionada con la nota y memorandos del encargado de negocios de los Estados Unidos, señor Max V. Krebs, referidos a los proyectos de ley sobre inversiones extranjeras, re-nacionalización de bancos y defensa del trabajo

y la producción nacional. Por unanimidad se aprueba una declaración de repudio. (Pág. 1288.)

7.—Apéndice:

I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 1291.)

II.—Inserciones. (Pág. 1292.)

III.—Asuntos entrados:

I.—Proyectos de resolución:

- 1.—Del señor diputado Viale: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre actitudes que habría asumido la embajada de los Estados Unidos de América con respecto a los proyectos en materia económica y financiera que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso de la Nación. (Pág. 1293.)
- 2.—Del señor diputado Cárdenas y otros: repudio a la intromisión de la embajada norteamericana en nuestro país al abrir juicio sobre las medidas económicas propuestas por el Poder Ejecutivo. (Pág. 1293.)
- 3.—Del señor diputado Lorences y otros: pedido de informes al Poder Ejecutivo respecto de los funcionarios aludidos por el encargado de negocios de los Estados Unidos en la nota que dirigiera al señor ministro de Hacienda y Finanzas. (Pág. 1293.)

Planteado así el objetivo del proyecto: incorporación de directorios regionales a las estructuras funcionales del Banco de la Nación Argentina y del Banco Nacional de Desarrollo, iniciativas a las que —reiteramos— prestamos el unánime apoyo de esta comisión, debemos, empero, señalar algunos reparos que merecen sus disposiciones.

En forma genérica señalamos el exceso de discrecionalidad que se otorga al Poder Ejecutivo nacional, habida cuenta de que esta comisión no conoce cuáles han de ser las modalidades organizativas y operativas que ha de implementar la ley, a fin de llevar el principio enunciado a la práctica, con el sentido señalado precedentemente.

Dejamos expresamente señalada la inquietud de esta comisión en orden a la determinación de las regiones en que habrán de operar los pertinentes directorios, las que, estimamos, deberían coincidir geográfica e instrumentalmente, con las que se delimiten en un futuro plan de promoción y/o desarrollo, inquietud que se justifica, toda vez que el crédito y la política bancaria, en suma, deberán constituir una de las palancas fundamentales de ese plan.

También esta inquietud que expresamos se refiere al grado de autonomía de los directorios regionales, porque sostenemos que dichas facultades deben ser tales que les permitan a los mismos una efectiva defensa de los intereses regionales que representan. Para ello, es nuestra opinión que la reforma de las respectivas cartas orgánicas, cuya facultad se delega en el Poder Ejecutivo nacional, debe instrumentarse de manera tal que les otorgue participación y resolución en la fijación de la política global de las respectivas instituciones.

Proponemos que la afectación de recursos por región, cuya regulación se pone en manos de los directorios zonales, se fije con intervención de los directorios descentralizados en base a pautas objetivas, tales como el monto de los depósitos regionales y también a los planes generales de promoción y/o desarrollo, en coordinación con los gobiernos provinciales.

Compartimos las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, tendientes todas ellas a limitar la delegación de facultades del proyecto original del Poder Ejecutivo nacional, dejando aquí establecido que la obligación impuesta al Ejecutivo de dar cuenta de las modificaciones que se introduzcan en las cartas orgánicas tiene un sentido práctico y de responsabilidad, que es el de reservarse, en definitiva, el derecho de revisar las mismas para verificar si se adecuan a los principios que informan este despacho.

Santiago Francisco Díaz Ortiz.

Sr. Presidente (Busacca). — Como se trata de un despacho producido por unanimidad, se va a votar en general.

Sr. Moral. — Señor presidente: pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Moral.

Sr. Moral. — Señor presidente: nuestro bloque había formulado un despacho en disidencia en relación con este proyecto. No deseamos abrir el debate por la urgencia en sancionar estas leyes, aunque creo que es de importancia la observación que formulamos.

Debido a esa urgencia, solicito la inserción de nuestra disidencia en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Busacca). — Si hubiera asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Busacca). — Se practicará la inserción solicitada (1).

Sr. Balestra. — Pido la palabra al solo efecto de hacer una aclaración.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Señor presidente: ha quedado aclarado en el seno de la comisión que en la designación de los directorios regionales de los bancos Nacional de Desarrollo y de la Nación Argentina se tendrá especialmente en cuenta la opinión de los gobiernos de las provincias comprendidos en cada una de las regiones. Ello resulta de nuestra moción presentada en la comisión, en el sentido de que tales directorios fueran designados a propuesta de los gobiernos provinciales.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar en general.

—Resultado afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 1º a 3º.

—El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente (Busacca). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley (2).

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Invito a los señores diputados a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 12 y 35.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

—A la hora 15 y 45:

5

RADICACION DE CAPITALES EXTRANJEROS

Sr. Presidente (Odena) — Continúa la sesión. Corresponde tratar ahora el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Fi-

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice.

(2) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

nanzas, en el proyecto de ley sobre régimen para la radicación de capitales extranjeros.

Dictamen de comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen para la radicación de capitales extranjeros; y, por las razones expuestas en el informe y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. AMBITO

Artículo 1º — La presente ley regirá en todo lo concerniente a:

- a) Las radicaciones directas de capital extranjero en:
 1. Divisas que se transfieran para su inversión en los sectores que determine el Poder Ejecutivo.
 2. Bienes nuevos de capital y sus re- puestas en la proporción indispensable que apruebe la autoridad de aplicación y cuya enajenación a cualquier título quedará prohibida en el contrato de radicación por el término que se establezca conforme a los bienes de que se trate.
 3. Créditos externos en divisas que se capitalicen, siempre que el destino a que hayan sido aplicados esos créditos justifique, a criterio de la autoridad de aplicación, la autorización de su radicación en los términos de esta ley y los créditos externos en moneda nacional que cumplan iguales requisitos.
 4. Utilidades provenientes de inversiones extranjeras, en condiciones de ser remesadas al exterior.
 5. Títulos de la deuda externa nacional, cuando así lo apruebe la autoridad de aplicación, previo informe del Banco Central de la República Argentina teniendo en cuenta las condiciones de la balanza de pagos y el análisis del caso en particular.
- b) Los créditos que obliguen como deudores a personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país, con acreedores domiciliados en el exterior, de los que surjan o puedan surgir derechos u obligaciones a transferir valores al exterior en concepto de amortización de capital o de pago de intereses;

- c) Los contratos o convenios, de cualquier naturaleza, entre personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país, y acreedores domiciliados en el exterior, en virtud de los cuales surjan o puedan surgir derechos u obligaciones a transferir valores al exterior. Se exceptúan los contratos de uso de tecnología, de transporte y de seguros.

II. DEFINICIONES

Art. 2º — A los efectos de las regulaciones contenidas en la presente ley, las empresas locales quedan clasificadas de la siguiente manera:

- a) Empresas de capital extranjero. Se entiende por tales aquellas cuyo capital nacional sea inferior al cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital con poder de decisión;
- b) Empresas con participación de capital nacional y extranjero. Se entiende por tales aquellas cuyo capital nacional, privado o estatal sea del cincuenta y uno por ciento (51 %) al ochenta por ciento (80 %) del capital de la empresa, posean poder jurídico de decisión y respecto de las cuales se acredite que la efectiva dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa corresponde a los inversores nacionales;
- c) Empresas de capital nacional. Se entiende por tales aquellas en que los inversores nacionales posean una participación superior al ochenta por ciento (80 %) del capital de la empresa y poder jurídico de decisión y respecto de las cuales se acredite que la efectiva dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa corresponde a los inversores nacionales.

Art. 3º — Se entiende por:

- a) Inversor extranjero: toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio nacional, titular de un aporte de capital a radicar o ya radicado en empresas de las clases definidas en el artículo 2º;
- b) Inversor nacional: toda persona física domiciliada en el país o toda persona jurídica constituida de acuerdo con las leyes del país y domiciliada en éste, cuyos capitales estén en manos de personas físicas domiciliadas en el país que no representen directa o indirectamente a personas físicas o jurídicas extranjeras, y el Estado nacional o provincial o municipal y sus dependencias, organismos de cualquier grado de descentralización y empresas estatales;

- c) Domicilio: es el definido por el artículo 89 del Código Civil.

III. DE LAS RADICACIONES

Condiciones

Art. 4º — Los inversores extranjeros que deseen radicar capital extranjero en el país conforme a lo establecido en el artículo 1º, inciso a), deberán solicitar previamente autorización a la autoridad de aplicación, la que efectuará la evaluación y negociación correspondiente. Las radicaciones se instrumentarán por medio de un contrato de radicación entre dicha autoridad y los inversores extranjeros, el que deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional, cuando dé lugar a la constitución de una empresa del tipo referido en el artículo 2º, inciso b), o del Honorable Congreso de la Nación cuando origine la constitución de una empresa del tipo establecido en el inciso a) del mismo artículo.

Art. 5º — Los contratos de radicación deberán atender substancialmente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Que la radicación se efectúe en las actividades y zonas geográficas determinadas prioritariamente por el Poder Ejecutivo;
- b) Que contribuya a un mejor empleo de los recursos humanos y naturales del país;
- c) Que tienda a mejorar las condiciones de vida de la población;
- d) Que adopte los recaudos necesarios a fin de impedir o limitar la contaminación ambiental;
- e) Que los bienes o servicios a producir posibiliten una substitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al balance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo de probables egresos por repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones —incluso las indirectas a través de los insumos— y otros egresos;
- f) Que incorpore la tecnología necesaria para los objetivos socioeconómicos del país contemplando el desarrollo local de investigaciones y estudios de tecnología aplicada en el área que corresponda y la generación de tecnología nacional;
- g) Que emplee personal directivo, científico, técnico y administrativo de nacionalidad argentina, en la proporción que en cada caso indique la autoridad de aplicación;
- h) Que no signifique el desplazamiento actual o futuro del mercado de empresas de capital nacional;

- i) Que no requiera una captación de ahorro interno superior a los límites que se establezcan en virtud de esta ley, y que garantice una adecuada estructura financiera para cumplir con la evolución de la actividad a que se destine.

Prohibiciones

Art. 6º — No serán autorizadas nuevas radicaciones que:

- a) Estén sujetas a limitaciones de sus posibilidades de exportar o condicionen las exportaciones a acuerdos o convenios limitativos de cualquier naturaleza que a juicio de la autoridad que deba aprobar la radicación no resulten aceptables;
- b) Sustraigan los posibles conflictos o controversias a la jurisdicción y competencia de los tribunales argentinos o permitan la subrogación por Estados o personas jurídicas internacionales de las acciones y derechos de los inversores extranjeros;
- c) Se destinen a los sectores de:
 1. Actividades relacionadas con la defensa y seguridad nacional.
 2. Servicios públicos, entendiéndose por tales la prestación de servicios sanitarios, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios postales.
 3. Seguros, banca comercial —excepto las sucursales de bancos extranjeros cuando exista un régimen de reciprocidad y convenga a los intereses nacionales y bancos de inversión— y actividades financieras. No se considerarán nuevas radicaciones las incluidas en el inciso c) del artículo 2º.
 4. Publicidad, radioemisoras y estaciones de televisión, diarios, revistas y editoriales y otros medios de comunicación masiva.
 5. Servicios de comercialización interna de productos de cualquier índole, con exclusión de los de su propia elaboración.
 6. Actividades que por ley estén reservadas a empresas estatales o a empresas de capital nacional, sin perjuicio de las normas que fijen para la subcontratación con empresas privadas.
 7. Actividades agrícola-ganaderas y forestales, salvo las que incorporen tecnología nueva de especial interés para la economía nacional, a juicio de la autoridad de aplicación.

8. Pesca, excepto cuando posibilite el ingreso de la producción a mercados internacionales cerrados.
9. Toda incorporación de nuevos sectores a la lista precedente deberá disponerse por ley.

d) Que tengan por objeto la adquisición de acciones, cuotas, participaciones sociales de cualquier tipo y fondos de comercio destinados a la producción o comercialización de bienes, existentes en el país y pertenecientes a empresas de capital nacional, salvo que la adquisición de activos físicos o fondos de comercio se efectúe en el proceso de liquidación por quiebra de una empresa nacional, y en condiciones que, de acuerdo con la legislación específica, aseguren igual posibilidad de concurrencia a la adquisición a inversores nacionales, respetando las prohibiciones de los incisos a), b) y c) de este artículo.

Art. 7º — Para las actividades no enumeradas en el artículo 6º, inciso c), la autoridad de aplicación dará preferencia a las radicaciones que se soliciten para ser efectuadas en empresas del tipo indicado en el artículo 2º, incisos b) y c), si el solicitante se obliga a:

- a) Un programa de transformación de la empresa en empresa de capital nacional en un término de diez (10) años, debiendo haberse integrado por lo menos el veinte por ciento (20 %) dentro de los primeros cinco (5) años y el resto en proporciones no menores al dieciséis por ciento (16 %) anual;
- b) Garantizar la exportación progresiva de su producción en el volumen y plazos que deberán determinarse en el contrato de radicación.

Art. 8º — Cuando una radicación extranjera sea autorizada para una actividad que suponga agotamiento de las fuentes de recursos, la autorización preverá expresamente que no se permitirán amortizaciones por agotamiento fuera de las establecidas con carácter general por las leyes tributarias.

Art. 9º — La radicación del capital extranjero deberá estar representada en todos los casos por acciones, cuotas o participaciones de capital nominativas, y no transferibles sin el requisito de la inscripción en los libros de la sociedad, sin perjuicio de la previa autorización de la autoridad de aplicación. No podrá establecerse el voto múltiple para las participaciones de capital extranjero.

Prioridades

Art. 10. — La autoridad de aplicación otorgará prioridad a las radicaciones que, además de

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5º, contemplen alguno de estos aspectos:

- a) Empleen mano de obra nacional desocupada y contribuyan a su instrucción;
- b) Apliquen tecnología creada o a desarrollar en el país;
- c) Utilicen materias primas, productos intermedios y bienes de capital de producción nacional;
- d) Contribuyan a la descentralización geográfica de las actividades económicas;
- e) Comprometan el depósito de las utilidades indicadas en el artículo 15, en el Banco Nacional de Desarrollo o en instituciones bancarias oficiales nacionales o provinciales con finalidades similares;
- f) Se obliguen a una reinversión de utilidades. En los contratos de radicación se determinarán expresamente las causales de prioridad consideradas, estableciéndose las obligaciones del inversor al respecto.

Repatriación de capital

Art. 11. — Se entiende por capital repatriable el formado por el monto de la inversión extranjera inicial autorizada y efectivamente radicada en el país, registrada en moneda de origen o similar, más las reinversiones autorizadas conforme a esta ley, menos el capital repatriado y las pérdidas netas, computadas en moneda de origen o similar, al tipo de cambio vigente en el momento de su determinación.

Art. 12. — La repatriación se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato de radicación o sus modificaciones, el cual:

- a) Garantizará la continuidad de funcionamiento de la empresa y la prestación del servicio en las condiciones estipuladas;
- b) Determinará la cuota anual de repatriación cuidando que la misma sea compatible con la continuidad indicada en el inciso a), no pudiendo exceder del veinte por ciento (20 %) del capital repatriable, y
- c) Establecerá un plazo inicial en el que no se realizarán repatriaciones, que no podrá ser inferior a cinco (5) años a partir de la aprobación del contrato de radicación.

Cada cuota anual de repatriación se determinará por montos fehacientemente acreditados y previa autorización de la autoridad de aplicación, en la moneda en que estuviere registrado el capital repatriable o similar al tipo de cambio vigente en el momento de la transferencia.

Transferencia de utilidades

Art. 13. — Los inversores extranjeros podrán remesar sus utilidades al exterior en la pro-

porción que se fije en el convenio de radicación o sus modificaciones. El monto de esa transferencia no podrá ser mayor a la tasa del doce con cincuenta, por ciento (12,50 %), o la que exceda en cuatro puntos a la del interés que se pague, en bancos de primera línea, para la moneda en que esté registrado el capital repatriable, por depósitos a plazo fijo de ciento ochenta (180) días como máximo, considerándose para determinar el tope la tasa superior resultante de ambos supuestos. La transferencia de utilidades no podrá efectuarse con fondos provenientes de créditos externos o internos y sólo se hará con recursos líquidos propios, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación. Tampoco podrá efectuarse la transferencia si existen deudas exigibles de carácter fiscal o previsional.

Reinversión de utilidades

Art. 14. — La autoridad de aplicación podrá autorizar la reinversión de las utilidades con derecho a transferencia, con la misma empresa, la que no podrá realizarse en condiciones distintas a las que estipule el contrato de radicación o sus modificaciones, y su aprobación se instrumentará por resolución de la autoridad de aplicación. La reinversión de utilidades con derecho a transferencia en otras empresas deberá ajustarse a las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias.

En todos los casos la reinversión se efectuará por montos fehacientemente acreditados en la moneda en que estuviere registrado el capital repatriable o similar al tipo de cambio vigente en la fecha de la autorización. La autoridad de aplicación podrá restringir el monto reinvertible a determinado porcentaje de las utilidades.

Una vez autorizada, la reinversión será considerada como una nueva radicación y dará derecho a repatriar capital y transferir utilidades conforme a lo establecido por esta ley.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, los inversores podrán reinvertir en la misma empresa, sin autorización previa y con la sola condición de su registro, sus utilidades anuales hasta el límite del cinco por ciento (5 %) del monto de la inversión autorizada.

Utilidades definitivamente radicadas en el país

Art. 15. — Las utilidades que anualmente excedan los porcentajes que determina el artículo 13 o cuya transferencia no se hubiere solicitado de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o cuya reinversión no se autorice conforme lo establecido en el artículo 14, quedarán definitivamente radicadas en el país y no podrán ser transferidas al exterior bajo ningún concepto, pero podrán ser invertidas o reinvertidas como capital local sin derecho a repatriación ni a transferencia de utilidades, previa conformidad de la autoridad de aplicación.

Restricciones

Art. 16. — En situación crítica de la balanza de pagos, a juicio del Banco Central de la República Argentina, las repatriaciones de capital y transferencias de utilidades podrán ser diferidas mientras aquella situación subsista, sin que ello afecte los derechos a tales recursos.

Art. 17. — La autoridad de aplicación fijará en cada contrato de radicación un límite máximo al endeudamiento del inversor extranjero o de las empresas extranjeras, con personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, domiciliadas en el país.

Dicho endeudamiento no podrá ser en ningún caso superior al monto del capital repatriable más las reservas originadas en utilidades nacionalizadas y se limitará exclusivamente al crédito interno de corto plazo en las condiciones que, para cada sector, se determine.

Art. 18. — Los inversores extranjeros que participen en el capital de empresas que a partir de la fecha de la vigencia de esta ley obtengan beneficios por el acogimiento a regímenes promocionales, perderán el derecho previsto en los artículos 11, 12 y 13, mientras duren los beneficios u obligaciones derivados de dicho acogimiento.

Art. 19. — En ningún caso podrá otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que el que se otorgue a inversores nacionales.

Radicaciones anteriores

Art. 20. — Las raditaciones de capital extranjero que determina el inciso a) del artículo 1º, ingresadas al país en virtud de cualquier norma vigente con anterioridad a esta ley, deberán inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras que establece el artículo 32, en las condiciones que fije la reglamentación.

Las remesas de utilidades de las empresas comprendidas en el artículo 2º, incisos a) y b), estarán gravadas por un impuesto especial a la transferencia conforme a la siguiente escala sobre el capital repatriable con derecho a transferencia de utilidades:

Hasta el	6 %	-	20 %
más del	6 al	9 %	- 22 %
más del	9 al	12 %	- 25 %
más del	12 al	15 %	- 30 %
más del	15 %	-	40 %

Este impuesto será recaudado por la Dirección General Impositiva de acuerdo con lo dispuesto en la ley 11.683 t. o. 1968 y sus modificaciones.

Quedan excluidos del impuesto precedente los inversores extranjeros que opten por sujetarse a las normas de esta ley, y soliciten su registro como tales, quedando en consecuencia sometidos a su régimen. En este supuesto, la autoridad de aplicación evaluará la solicitud conforme a los requisitos y al procedimiento establecido por

la presente ley proponiendo al Poder Ejecutivo la aprobación de las nuevas condiciones y del contrato de radicación pertinente.

Art. 21. — A los efectos de las radicaciones que determina el artículo 20 se computará como capital repatriable con derecho a transferencia de utilidades el que resulte propiedad de inversores extranjeros, efectivamente radicado en el país y fehacientemente comprobado por la autoridad de aplicación.

Art. 22. — Los convenios de radicación que se celebren podrán contemplar, en los casos que la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo así lo determine, un programa de transformación de las empresas en empresas de capital nacional o con participación de capital nacional y extranjero, según se establezca, que garantice un aumento progresivo de la inversión nacional.

En esos casos, el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta las características del sector, volumen de las empresas, situación de la balanza de pagos y posibilidades de inversión nacional.

Art. 23. — Las radicaciones extranjeras que no hubieren cumplimentado en término la obligación de inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras no podrán repatriar capital ni remesar utilidades al exterior, quedando asimiladas a los efectos del uso del crédito a las inversiones nacionales.

IV. CRÉDITOS EXTERNOS Y CONTRATOS O CONVENIOS DE PARTES

Art. 24. — Los créditos externos previstos en el artículo 1º, inciso b), sin principio de ejecución a la fecha de publicación de la reglamentación de esta ley en el Boletín Oficial, requieren autorización previa del Banco Central de la República Argentina, conforme lo establezca la reglamentación. La autorización se otorgará previo análisis de las características generales de la operación propuesta, según las condiciones de los mercados financieros internacionales, y de acuerdo con el principio de la realidad económica. La autorización deberá quedar registrada ante el Banco Central de la República Argentina, quien podrá fijar límites globales o sectoriales de endeudamiento externo por períodos determinados.

Se excluyen de los requisitos de este artículo a los créditos externos por bienes de capital pagaderos a plazo y los destinados a cubrir importaciones.

Créditos a empresas extranjeras

Art. 25. — Los créditos externos que obliguen a empresas extranjeras quedan sujetos a las siguientes condiciones:

- a) No podrá otorgarse a dichos créditos aval bancario bajo ningún concepto;
- b) El monto de las transferencias al exterior por penalidades en que incurra la

empresa extranjera, por su culpa o dolo o el de sus representantes, mandatarios o directores, se descontará directamente del monto del capital repatriable, sin perjuicio de las acciones que correspondan;

- c) Los créditos sin plazo o sin monto fijo no podrán superar el límite máximo de endeudamiento ni apartarse de las condiciones que para cada operación establezca el Banco Central de la República Argentina.

Se excluyen de los requisitos de este artículo a los créditos externos por bienes de capital pagaderos a plazo y los destinados a cubrir importaciones.

Créditos entre casa matriz y/o filiales o subsidiarias

Art. 26. — Para los contratos de crédito externo convenidos entre casa matriz y filiales o subsidiarias de una misma empresa extranjera, o entre éstas, la tasa de interés efectivo anual no podrá exceder en más de dos (2) puntos la de los valores de primera clase vigentes en el mercado financiero del país de origen de la moneda en que se haya registrado la operación. Se entiende que en ningún caso estas tasas podrán ser superiores a las autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para los préstamos de que se trata en el artículo 24. A los efectos de la aplicación del presente artículo, se entiende por interés efectivo el monto total que debe pagar el deudor para la utilización del crédito, incluyendo gastos, primas y comisiones de todo orden.

Créditos anteriores

Art. 27. — Los créditos externos con principio de ejecución a la fecha de la publicación de la reglamentación de esta ley en el Boletín Oficial deberán adecuar sus prórrogas o modificaciones a lo establecido en los artículos 24 a 26. Los créditos sin monto o sin plazo fijo deberán adecuarse a esas normas dentro del término de un (1) año a partir de esa publicación. Vencido dicho plazo, sin el cumplimiento de estos requisitos no podrán efectuarse remesas al exterior por estos conceptos.

Se excluyen de los requisitos de este artículo a los créditos externos por bienes de capital pagaderos a plazo y los destinados a cubrir importaciones.

Contratos o convenios

Art. 28. — Los contratos o convenios a que se refiere el inciso c) del artículo 1º, celebrados a partir de la fecha de vigencia de esta ley, sólo autorizarán remesas al exterior una vez aprobados por la autoridad de aplicación.

V. DISPOSICIONES FINALES

Penalidades

Art. 29. — Se declaran nulos todos los pactos o acuerdos entre socios o accionistas y sindicatos de acciones tendientes a violar las normas de esta ley y especialmente por los que se otorguen al capital extranjero derechos ocultos de decisión o veto distintos de los que aparezcan ostensibles en los actos que se exhiban o denuncien a la autoridad de aplicación.

Art. 30. — Las transgresiones a las disposiciones de la presente ley determinarán la suspensión transitoria o definitiva de los derechos establecidos en la misma, sin perjuicio de las responsabilidades penales, cambiarias, tributarias y/o aduaneras, tanto para la empresa como para sus mandatarios, cómplices o encubridores ocultos y partícipes.

Art. 31. — La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el contrato de radicación por una empresa local de restitución de inversión extranjera será asumida en forma conjunta y solidaria por el inversor extranjero.

Art. 32. — La autoridad de aplicación y control del cumplimiento de las radicaciones autorizadas será creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional dentro del ámbito del Ministerio de Economía y de ella dependerá un registro de inversiones extranjeras. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a contar desde su vigencia.

Art. 33. — Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las providencias necesarias para reconvertir a empresas de capital nacional en un plazo de tres (3) años a las que habiendo tenido este último carácter se transfirieron a inversores extranjeros mediante el procedimiento de desnacionalización a que se alude en el artículo 6º, inciso d), de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.

Art. 34. — Esta ley es de orden público. El Estado declara que integra el concepto de orden público el principio de respeto a los compromisos estatales.

Art. 35. — La presente ley rige en todo el territorio de la Nación y deroga las disposiciones de la llamada ley 19.151 y los decretos reglamentarios números 2.400/72 y 7.473/72, así como toda otra norma que resulte incompatible con su vigencia. Todas las presentaciones en trámite realizadas con anterioridad a la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial deberán adecuarse a sus normas.

Art. 36. — Dentro de los 60 días de la fecha de aplicación de esta ley el Poder Ejecutivo elevará al Honorable Congreso un proyecto de ley que regule el monto de las remesas por servicios tecnológicos, royalties, regalías y otros conceptos como comisiones, honorarios, que impliquen erogaciones en moneda extranjera co-

rrespondientes a empresas nacionales, mixtas o extranjeras.

Art. 37. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 27 de julio de 1973.

Carlos Palacio Deheza. — Jorge Nelson Gualco. — Virginia Luisa Sanquineti. — Rodolfo Eduardo Desperbasques. — Agustín Alfredo Avila. — Victorio Alberto Bellisio. — Manuel I. Cabana. — Armando Daniel Croatto. — Santiago Francisco Díaz Ortiz. — Jorge Glellet. — Hugo Ramón Lima. — Pedro Nicolás Martínez. — Manuel Isauro Molina. — Alfredo S. Rodríguez. — Luis Rubeo. — Clotilde Isolina Urdínez de Volpe. — Roque Antonio Vergara.

En disidencia parcial:

Osvaldo Alvarez Guerrero. — Mario Abel Amaya. — Tomás Pedro Arana. — Tomás Ameghino Arbo. — Ramón Eduardo Arigós. — Raúl I. Bajczman. — Horacio Hueyo. — Fausto J. Mombelli. — Rubén Francisco Rabanal. — Leopoldo M. Suárez. — Antonio A. Tróccoli. — Joaquín Tula Durán.

En disidencia total:

Ricardo Ramón Balestra. — Héctor Raúl Sandler.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 14 de junio de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de elevar a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se regirán las inversiones de capital extranjero en nuestro país.

La necesidad del dictado de una norma legislativa como la propuesta se basa en las particulares condiciones que ha asumido la evolución de la economía mundial, tanto en lo que respecta a la creciente importancia de los movimientos internacionales de capitales como a la influencia alcanzada por las empresas multinacionales en el mismo.

Por ello, todos los países en proceso de liberación de la dependencia externa se han planteado la necesidad de establecer normas que regulen las inversiones externas y adecuen la actividad de las empresas multinacionales al interés nacional. A nuestro país le cabe el mérito de haber sido uno de los primeros en legislar en este aspecto, con el dictado del decreto 3.347/48 y, muy especialmente, de la ley 14.222, en el año 1953. Hasta ese momento no existió ningún régimen especial para las radicaciones de capital extranjero, las cuales estaban reguladas por disposiciones generales del Banco Central en cuanto al manejo de las divisas.

La citada ley 14.222 tenía por objetivo «formar las industrias básicas y economizadoras de divisas que operan con tecnología avanzada». A tal fin se

alentaban las radicaciones de capitales, a las cuales se asignaba una cierta cantidad de beneficios, entre ellos, la posibilidad de exención impositiva y la introducción libre de impuestos, de las maquinarias y equipos necesarios para la explotación. Asimismo, dichos capitales quedaban sujetos a la legislación argentina y equiparados a los nacionales.

Pero, al mismo tiempo, dicha ley introdujo un aspecto fundamental: la necesidad de controlar las remesas de utilidades y los giros por repatriación del capital, a efectos de impedir las inversiones especulativas a corto plazo. Estas restricciones estaban destinadas a controlar y orientar la radicación efectiva de los capitales extranjeros de acuerdo con los principios de independencia económica sustentados por el gobierno nacional. El capital ingresado sólo al cabo de dos años podría enviar utilidades al exterior, siempre y cuando estas remesas no superaran el 8 % del capital invertido. Las utilidades excedentes de dicho tope, al igual que las que pudiendo ser transferidas no lo fueron en su momento, no eran registradas como capital externo. Estas utilidades no podían girarse al exterior ni acumularse al capital originario, no pudiendo, por lo tanto, ser computadas sobre ellas las utilidades pasibles de ser remitidas al exterior ni el capital original en el caso de repatriación. Por su parte, la repatriación del capital sólo era permitida al cabo de diez años de radicado el mismo, para ser efectuada en cuotas (entre el 10 y el 20 % del capital), cuidando no afectar el desenvolvimiento normal de la planta.

Por su parte, el decreto 19.111/53 reglamentario de la ley 14.222 determinaba que tanto la remesa de utilidades como la repatriación del capital se hiciera con fondos propios de la empresa. De esta forma, se impedía el uso del financiamiento interno, bancario o extrabancario, para tales fines.

El proyecto que se eleva retoma las principales características de la ley mencionada, adaptándolas de acuerdo con las circunstancias actuales, particularmente de la Decisión Nº 24 sobre Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros de los países del Pacto Andino.

Con los regímenes de carácter liberal en la materia se han producido los siguientes efectos:

- Tendencia al uso intensivo del crédito interno, absorbiendo fondos locales que, en gran medida, concurrían a financiar la inversión. De este modo, las radicaciones efectivas eran, en los hechos, menores que las autorizadas.
- Tendencia a remitir utilidades al exterior sin limitaciones y en cantidades que, en muy pocos años, igualan o superan el monto inicial de la inversión.
- Concentración de sectores industriales íntegros en manos de grandes corporaciones multinacionales, con la consecuente disminución del poder de decisión nacional en la industria. Marcada tendencia al establecimiento de figuras monopólicas en el sector.
- Concentración de las inversiones en sectores de alta rentabilidad, cuyo mercado interno era protegido con elevados recargos aduaneros.
- Tendencia a la importación indiscriminada de equipos y materias primas, desalentando el desarrollo de las industrias locales proveedoras de los mismos.
- Tendencia a la absorción de empresas nacionales, incentivadas por tipos de cambio favorables y por condiciones excesivamente liberales en cuanto al control de dichos movimientos.

Todas estas características contribuyeron a establecer y sostener una economía con marcados rasgos de dependencia externa. La situación de dependencia que trae consigo la política liberal aplicada a las inversiones extranjeras asume múltiples formas, entre las que pueden señalarse las siguientes:

- El centro de decisión de la política económica en sectores claves de la industria se ubica fuera de las fronteras del país, en manos de las grandes empresas multinacionales.
- El país dependiente adopta las pautas de consumo de los países dominantes, con la consiguiente orientación de los recursos hacia sectores productores de bienes destinados a las capas de mayores ingresos de la población.
- Introducción de tecnología ligada al consumo de los estratos privilegiados de la sociedad. En este sentido, la dependencia se acentúa cuanto mayor es el ritmo de renovación tecnológica en los países dominantes.
- Introducción de industrias con alta intensidad de capital, lo cual reduce las posibilidades de realizar inversiones en la parte del aparato productivo que se destina a satisfacer las necesidades del conjunto de la población.
- Control de la difusión tecnológica por grupos ubicados fuera de las fronteras nacionales.

Ante el panorama que presenta el problema de la inversión extranjera en nuestro país, es necesario que el Estado tome una política firme y coherente frente al mismo. Dicha política estará basada en los principios de independencia económica, soberanía política y justicia social sostenidos por el gobierno nacional. Esto implica que, si bien se reconocen las ventajas que puede traer el aporte del capital externo, éste deberá ajustarse al interés nacional, a las prioridades determinadas por el gobierno y a las modalidades fijadas por la legislación específica para operar en el mercado interno.

Así mismo, es necesario tomar medidas que tiendan a la reargentinización de las empresas de capital interno que fueron adquiridas por inversores extranjeros, como parte fundamental del proceso de liberación nacional en que el país está empeñado.

El proyecto de ley comprende tanto a las radicaciones de capitales como a las operaciones financieras que obligan a personas domiciliadas en el país con respecto a personas domiciliadas en el extranjero.

Con referencia a las radicaciones de capitales se establecen claramente las características que deben reunir para su aprobación. La evaluación de las inversiones propuestas se efectuará de acuerdo con criterios que aseguren, entre otros, los siguientes objetivos fundamentales: la plena ocupación de los recursos productivos, la generación de tecnología nacional, la elevación de las condiciones de vida de la población, el mejoramiento del balance de pagos internacionales y el desarrollo equilibrado en el plano regional. El proyecto prohíbe la autorización de las inversiones destinadas a sectores de la actividad productiva que por su naturaleza deben reservarse al capital nacional y de los que estén sometidos a limitaciones en la exportación de sus productos o pretendan substraer el conocimiento de las controversias jurídicas de los tribunales argentinos.

Con el fin de salvaguardar el interés nacional y asegurar el logro de los objetivos mencionados, las inversiones extranjeras sólo podrán realizarse en el

futuro a través de contratos individuales por un plazo determinado y renovable celebrados con la autoridad de aplicación, en los que se preverá el monto y destino de la radicación, la tasa máxima de utilidades que podrán girarse al extranjero. El proyecto establece, así mismo, el procedimiento por el cual la autoridad de aplicación podrá autorizar la reinversión de utilidades.

Otro aspecto de significación en el proyecto que se adjunta es la limitación del endeudamiento externo de las empresas extranjeras, el cual estará sujeto a la aprobación del Banco Central y de la autoridad de aplicación. De este modo, se evita que dichas empresas puedan remitir utilidades ocultas bajo forma de intereses, así como posibles dificultades a la balanza de pagos del país debido al endeudamiento incontrolado de las mismas.

Como parte del proceso de ordenamiento de la inversión extranjera a las condiciones determinantes de la etapa de reconstrucción nacional es necesario también consagrar el principio de respeto a los compromisos estatales que se asumirán conforme a las pautas de la presente ley. La seguridad jurídica dentro de los principios establecidos será garantizada por el gobierno popular como basamento fundamental para la estructuración de relaciones de interés recíproco, pero orientados hacia la grandeza nacional.

De acuerdo con la fundamentación precedente, considero que el proyecto de ley que se eleva contribuirá eficazmente al proceso de liberación nacional que se inicia, y que constituye un objetivo prioritario del gobierno nacional.

Todas estas razones han decidido al Poder Ejecutivo nacional a propiciar la iniciativa contenida en el proyecto de ley adjunto, descontando que vuestra honorabilidad compartirá el criterio sustentado y prestará su sanción al mismo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

HÉCTOR J. CÁMPORA.
José B. Gelbard.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. Ambito

Artículo 1º — La presente ley regirá en todo lo concerniente a:

a) Las radicaciones directas de capital extranjero en:

1. Divisas que se transfieran para su inversión en los sectores que determine el Poder Ejecutivo.
2. Bienes de capital y sus repuestos en la proporción indispensable que apruebe la autoridad de aplicación y cuya enajenación a cualquier título quedará prohibida en el contrato de radicación por el término que se establezca conforme a los bienes de que se trate.
3. Créditos externos en divisas que se capitalicen, siempre que el destino a que hayan sido aplicados esos créditos justifique, a criterio de la autoridad de aplicación, la amortización de su radicación en los términos de esta ley y los créditos externos en moneda nacional que cumplan iguales requisitos.

4. Utilidades provenientes de inversiones extranjeras en condiciones de ser remesadas al exterior.

5. Títulos de la deuda externa nacional, cuando así lo apruebe la autoridad de aplicación, previo informe del Banco Central de la República Argentina teniendo en cuenta las condiciones de la balanza de pagos y el análisis del caso en particular;

b) Los créditos que obliguen como deudores a personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país con acreedores domiciliados en el exterior de los que surjan, o puedan surgir derechos u obligaciones a transferir valores al exterior en concepto de amortización de capital o de pago de intereses;

c) Los contratos o convenios, de cualquier naturaleza, entre personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país, y acreedores domiciliados en el exterior, en virtud de los cuales surjan o puedan surgir derechos u obligaciones a transferir valores al exterior. Se exceptúan los contratos de uso de tecnología, de transporte y de seguros.

II. Definiciones

Art. 2º — A los efectos de las regulaciones contenidas en la presente ley, las empresas locales quedan clasificadas de la siguiente manera:

a) Empresas de capital extranjero. Se entiende por tales aquellas cuyo capital nacional sea inferior al cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital;

b) Empresas con participación de capital nacional y extranjero. Se entiende por tales aquellas cuyo capital nacional, privado o estatal, sea del cincuenta y uno por ciento (51 %) al ochenta por ciento (80 %) del capital de la empresa, posean poder jurídico de decisión y respecto de las cuales se acredite que la efectiva dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa corresponde a los inversores nacionales;

c) Empresas de capital nacional. Se entiende por tales aquellas en que los inversores nacionales posean una participación superior al ochenta por ciento (80 %) del capital de la empresa y poder jurídico de decisión y respecto de las cuales se acredite que la efectiva dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa corresponde a los inversores nacionales.

Art. 3º — Se entiende por:

a) Inversor extranjero: toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio nacional, titular de un aporte de capital a radicar o ya radicado en empresas de las clases definidas en el artículo 2º;

b) Inversor nacional: toda persona física domiciliada en el país o toda persona jurídica constituida de acuerdo con las leyes del país, y domiciliada en éste, cuyos capitales estén en manos de personas físicas domiciliadas en el país que no representen directa o indirectamen-

te a personas físicas o jurídicas extranjeras, y el Estado nacional o provincial o municipal y sus dependencias, organismos de cualquier grado de descentralización y empresas estatales;

c) Domicilio: es el definido por el artículo 39 del Código Civil.

III. De las radicaciones

Condiciones

Art. 4º — Los inversores extranjeros que deseen radicar capital extranjero en el país conforme a lo establecido en el artículo 1º, inciso a), deberán solicitar previamente autorización a la autoridad de aplicación, la que efectuará la evaluación y negociación correspondiente. Las radicaciones se instrumentarán por medio de un contrato de radicación entre dicha autoridad y los inversores extranjeros, el que deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional, cuando dé lugar a la constitución de una empresa del tipo referido en el artículo 2º, inciso b), o del Honorable Congreso de la Nación cuando origine la constitución de una empresa del tipo establecido en el inciso a) del mismo artículo.

Art. 5º — Los contratos de radicación proveerán al cumplimiento de los requisitos siguientes:

- a) Que la radicación se efectúe en las actividades y zonas geográficas determinadas prioritariamente por el Poder Ejecutivo;
- b) Que contribuya a un mejor empleo de los recursos humanos y naturales del país;
- c) Que tienda a mejorar las condiciones de vida de la población;
- d) Que adopte los recaudos necesarios a fin de impedir o limitar la contaminación ambiental;
- e) Que los bienes o servicios a producir posibiliten una substitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al balance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo los probables egresos por repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones —incluso las indirectas a través de los insumos— y otros egresos;
- f) Que incorpore la tecnología necesaria para los objetivos socioeconómicos del país, contemplando el desarrollo local de investigaciones y estudios de tecnología aplicada en el área que corresponda y la generación de tecnología nacional;
- g) Que emplee personal directivo, científico, técnico y administrativo de nacionalidad argentina en la proporción que en cada caso indique la autoridad de aplicación;
- h) Que no signifique el desplazamiento actual o futuro del mercado de empresas de capital nacional;
- i) Que no requiera una captación de ahorro interno superior a los límites que se establezcan en virtud de esta ley, y que garantice una adecuada estructura financiera para cumplir con la evolución de la actividad a que se destine.

Prohibiciones

Art. 6º — No serán autorizadas nuevas radicaciones que:

- a) Estén sujetas a limitaciones de sus posibilidades de exportar o condicionen las exportaciones a acuerdos o convenios limitativos de cualquier naturaleza;
- b) Substraigan los posibles conflictos o controversias a la jurisdicción y competencia de los tribunales argentinos o permitan la subrogación por Estados o personas jurídicas internacionales de las acciones y derechos de los inversores extranjeros;
- c) Se destinen a los sectores de:
 1. Actividades relacionadas con la defensa y seguridad nacional.
 2. Servicios públicos, entendiéndose por tales la prestación de servicios sanitarios, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios postales.
 3. Seguros, banca comercial —excepto las sucursales de bancos extranjeros cuando exista un régimen de reciprocidad y convenga a los intereses nacionales— y actividades financieras.
 4. Publicidad, radioemisoras y estaciones de televisión, diarios, revistas y editoriales.
 5. Servicios de comercialización interna de productos de cualquier índole, con exclusión de los de su propia elaboración.
 6. Actividades que por ley estén reservadas a empresas estatales o a empresas de capital nacional, sin perjuicio de las normas que fijen para la subcontratación con empresas privadas.
 7. Actividades agrícola-ganaderas y forestales.
 8. Toda incorporación de nuevos sectores a la lista precedente deberá disponerse por ley;
- d) Que tengan por objeto la adquisición de acciones, cuotas, participaciones sociales de cualquier tipo y fondos de comercio destinados a la producción o comercialización de bienes, existentes en el país y pertenecientes a empresas de capital nacional, salvo que la adquisición de activos físicos o fondos de comercio se efectúe en el proceso de liquidación por quiebra de una empresa nacional, y en condiciones que, de acuerdo con la legislación específica, aseguren igual posibilidad de concurrencia a la adquisición a inversores nacionales.

Art. 7º — Para las actividades no enumeradas en el artículo 6º, inciso c), la autoridad de aplicación dará preferencia a las radicaciones que se soliciten para ser efectuadas en empresas del tipo indicado en el artículo 2º, incisos b) y c), si el solicitante se obliga a:

- a) Un programa de transformación de la empresa en empresa de capital nacional en un término de diez (10) años, debiendo haberse integrado por lo menos el veinte por ciento (20 %) dentro de los primeros cinco (5) años y el resto en proporciones no menores al dieciséis por ciento (16 %) anual;
- b) Garantizar la exportación progresiva de su producción en el volumen y plazos que deberán determinarse en el contrato de radicación.

Art. 8º — Cuando una radicación extranjera sea autorizada para una actividad que suponga agotamiento de las fuentes de recursos, la autorización preverá expresamente que no se permitirán amortizaciones por agotamiento fuera de las establecidas con carácter general por las leyes tributarias.

Art. 9º — La radicación del capital extranjero deberá estar representada en todos los casos por acciones, cuotas o participaciones de capital nominativas, y no transferibles sin el requisito de la inscripción en los libros de la sociedad, sin perjuicio de la previa autorización de la autoridad de aplicación. No podrá establecerse el voto múltiple para las participaciones de capital extranjero.

Prioridades

Art. 10. — La autoridad de aplicación otorgará prioridad a las radicaciones que, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5º, contemplen alguno de estos aspectos:

- a) Empleen mano de obra nacional desocupada y contribuyan a su instrucción;
- b) Apliquen tecnología creada o a desarrollar en el país;
- c) Utilicen materias primas, productos intermedios y bienes de capital de producción nacional;
- d) Contribuyan a la descentralización geográfica de las actividades económicas;
- e) Comprometan el depósito de las utilidades indicadas en el artículo 15 en el Banco Nacional de Desarrollo o en instituciones bancarias oficiales nacionales o provinciales con finalidades similares;
- f) Se obliguen a una reinversión de utilidades. En los contratos de radicación se determinarán expresamente las causales de prioridad consideradas, estableciéndose las obligaciones del inversor al respecto.

Repatriación de capital

Art. 11. — Se entiende por capital repatriable el formado por el monto de la inversión extranjera inicial autorizada y efectivamente radicada en el país, registrada en moneda de origen o similar, más las reinversiones autorizadas conforme a esta ley, menos el capital repatriado y las pérdidas netas, computadas en moneda de origen o similar, al tipo de cambio vigente en el momento de su determinación.

Art. 12. — La repatriación se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato de radicación o sus modificaciones, el cual:

- a) Garantizará la continuidad de funcionamiento de la empresa y la prestación del servicio en las condiciones estipuladas;
- b) Determinará la cuota anual de repatriación cuidando que la misma sea compatible con la continuidad indicada en el inciso a), no pudiendo exceder del veinte por ciento (20 %) del capital repatriable, y
- c) Establecerá un plazo inicial en el que no se realizarán repatriaciones, que no podrá ser inferior a cinco (5) años a partir de la aprobación del contrato de radicación.

Cada cuota anual de repatriación se determinará por montos fehacientemente acreditados y previa

autorización de la autoridad de aplicación, en la moneda en que estuviere registrado el capital repatriable o similar al tipo de cambio vigente en el momento de la transferencia.

Transferencia de utilidades

Art. 13. — Los inversores extranjeros podrán remesar sus utilidades al exterior en la proporción que se fije en el convenio de radicación o sus modificaciones. El monto de esa transferencia no podrá ser mayor a la tasa del 12,50 % o la que exceda en cuatro puntos a la del interés que se pague, en bancos de primera línea, para la moneda en que esté registrado el capital repatriable, por depósitos a plazo fijo de ciento ochenta (180) días como máximo, considerándose para determinar el tope la tasa superior resultante de ambos supuestos. La transferencia de utilidades no podrá efectuarse con fondos provenientes de créditos externos o internos y sólo se hará con recursos líquidos propios, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación. Tampoco podrá efectuarse la transferencia si existen deudas exigibles de carácter fiscal o previsional.

Reinversión de utilidades

Art. 14. — La autoridad de aplicación podrá autorizar la reinversión de las utilidades con derecho a transferencia, en la misma empresa, la que no podrá realizarse en condiciones distintas a las que estipule el contrato de radicación o sus modificaciones, y su aprobación se instrumentará por resolución de la autoridad de aplicación. La reinversión de utilidades con derecho a transferencia en otras empresas deberá ajustarse a las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias.

En todos los casos la inversión o reinversión se efectuará por montos fehacientemente acreditados en la moneda en que estuviere registrado el capital repatriable o similar al tipo de cambio vigente en la fecha de la autorización. La autoridad de aplicación podrá restringir el monto reinvertible a determinado porcentaje de las utilidades.

Una vez autorizada, la reinversión será considerada como una nueva radicación y dará derecho a repatriar capital y transferir utilidades conforme a lo establecido por esta ley.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, los inversores podrán reinvertir en la misma empresa, sin autorización previa y con la sola condición de su registro, sus utilidades anuales hasta el límite del cinco por ciento (5 %) del monto de la inversión autorizada.

Nacionalización de utilidades

Art. 15. — Las utilidades que anualmente excedan los porcentajes que determina el artículo 13 o cuya transferencia no se hubiere solicitado de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o cuya reinversión no se autorice conforme lo establecido en el artículo 14, quedarán definitivamente radicadas en el país y no podrán ser transferidas al exterior bajo ningún concepto, pero podrán ser invertidas o reinvertidas como capital local sin derecho a repatriación ni a transferencia de utilidades.

Restricciones

Art. 16. — En situación crítica de la balanza de pagos, a juicio del Banco Central de la República Argentina, las repatriaciones de capital y transfe-

rencia de utilidades podrán ser diferidas mientras aquella situación subsista, sin que ello afecte los derechos a la remesa de tales utilidades.

Art. 17. — La autoridad de aplicación fijará en cada contrato de radicación un límite máximo al endeudamiento del inversor extranjero o de las empresas extranjeras, con personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, domiciliadas en el país.

Dicho endeudamiento no podrá ser en ningún caso superior al monto del capital repatriable más las reservas originadas en utilidades nacionalizadas y se limitará exclusivamente al crédito interno de corto plazo en las condiciones que, para cada sector, se determinen.

Art. 18. — Los inversores extranjeros que participen en el capital de empresas que a partir de la fecha de la vigencia de esta ley obtengan beneficios por el acogimiento a regímenes promocionales, perderán el derecho previsto en los artículos 11, 12 y 13, mientras duren los beneficios u obligaciones derivados de dicho acogimiento. En ningún caso podrá otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que el que se otorgue a inversores nacionales.

Radicaciones anteriores

Art. 19. — Las raditaciones de capital extranjero que determina el inciso a) del artículo 1º, ingresadas al país en virtud de cualquier norma vigente con anterioridad a esta ley deberán inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras que establece el artículo 32, en las condiciones que fije la reglamentación.

Los inversores extranjeros optarán dentro de los ciento veinte días de publicada dicha reglamentación en el Boletín Oficial por:

- a) Sujetarse a las normas de esta ley y solicitar su registro como tales, quedando en consecuencia sometidas a su régimen. En este supuesto, la autoridad de aplicación evaluará la solicitud conforme a los requisitos y al procedimiento establecido por la presente ley proponiendo al Poder Ejecutivo la aprobación de las nuevas condiciones y del contrato de raditaciones pertinente, que contemplará la transformación gradual de la empresa al tipo establecido en el artículo 2º, inciso b), si no se tratara de una empresa incluida en las restricciones del artículo 6º, en que procederá su transformación a la empresa definida en el artículo 2º, inciso c);
- b) Continuar sujetas al régimen bajo el cual se efectuaron.

A partir del vencimiento del plazo establecido, las remesas de utilidades de las empresas comprendidas en el artículo 2º, incisos a) y b), que no suscriban al convenio de radicación, estarán gravadas por un impuesto especial conforme a la siguiente escala sobre el capital repatriable con derecho a transferencia de utilidades:

Hasta el	6 %	—	20 %
más del	6 al 9 %	—	22 %
más del	9 al 12 %	—	25 %
más del	12 al 15 %	—	30 %
más del	15 %	—	40 %

Art. 20. — A los efectos de las raditaciones que determina el artículo 19 se computará como capital repatriable con derecho a transferencia de utilidades

el que resulte propiedad de inversores extranjeros, efectivamente radicado en el país y fehacientemente comprobado por la autoridad de aplicación.

Art. 21. — Cuando se ejercite la opción prevista en el artículo 19, inciso a), los convenios de radicación que se celebrarán dentro de los seis meses de la opción contemplarán un programa de transformación en empresas de capital nacional, o con participación de capital nacional y extranjero, según sea el caso, que garantice un aumento progresivo de la inversión nacional hasta cumplir su transformación total.

Art. 22. — Las raditaciones extranjeras que no hubieren cumplimentado en término la obligación de inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras y formulado la opción establecida en el artículo 19, no podrán registrarse y no darán derecho a repatriar capital ni remesar utilidades al exterior.

IV. Créditos externos y contratos o convenios de partes

Art. 23. — Los créditos externos previstos en el artículo 1º, inciso b), sin principio de ejecución a la fecha de publicación de la reglamentación de esta ley en el Boletín Oficial, requieren autorización previa del Banco Central de la República Argentina, conforme lo establezca la reglamentación. La autorización se otorgará previo análisis de las características generales de la operación propuesta, según las condiciones de los mercados financieros internacionales, y de acuerdo con el principio de la realidad económica. La autorización deberá quedar registrada ante el Banco Central de la República Argentina, quien podrá fijar límites globales o sectoriales de endeudamiento externo por períodos determinados.

Créditos a empresas extranjeras

Art. 24. — Los créditos externos que obliguen a empresas extranjeras quedan sujetos a las siguientes condiciones:

- a) No podrá otorgarse a dichos créditos aval bancario bajo ningún concepto;
- b) El monto de las transferencias al exterior por penalidades en que incurra la empresa extranjera, por su culpa o dolo o el de sus representantes, mandatarios o directores, se descontará directamente del monto del capital repatriable, sin perjuicio de las acciones que correspondan;
- c) Los créditos sin plazo o sin monto fijo no podrán superar el límite máximo de endeudamiento ni apartarse de las condiciones que para cada operación establezca el Banco Central de la República Argentina.

Créditos entre casa matriz y/o filiales o subsidiarias

Art. 25. — Para los contratos de crédito externo convenidos entre casa matriz y filiales o subsidiarias de una misma empresa extranjera, o entre éstas, la tasa de interés efectivo anual no podrá exceder en más de dos (2) puntos la de los valores de primera clase vigentes en el mercado financiero del país de origen de la moneda en que se haya registrado la operación. Se entiende que en ningún caso estas tasas podrán ser superiores a las autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para los préstamos de que se trata en el artículo 23. A los efectos de la aplicación del presente artículo, se entiende por interés efectivo el monto total que debe pagar el deudor para la utilización del crédito, incluyendo gastos, primas y comisiones de todo orden.

Créditos anteriores

Art. 25. — Los créditos externos con principio de ejecución a la fecha de la publicación de la reglamentación de esta ley en el Boletín Oficial deberán adecuar sus prórrogas o modificaciones a lo establecido en los artículos 23 a 25. Los créditos sin monto o sin plazo fijo deberán adecuarse a esas normas dentro del término de un (1) año a partir de esa publicación. Vencido dicho plazo, sin el cumplimiento de estos requisitos no podrá efectuarse remesas al exterior por estos conceptos.

Contratos o convenios

Art. 27. — Los contratos o convenios a que se refiere el inciso c) del artículo 1º, celebrados a partir de la fecha de vigencia de esta ley, sólo autorizarán remesas al exterior una vez aprobados por la autoridad de aplicación.

*V. Disposiciones finales**Penalidades*

Art. 28. — Se declaran nulos todos los pactos o acuerdos entre socios o accionistas y sindicatos de acciones tendientes a violar las normas de esta ley y especialmente por los que se otorgue al capital extranjero derechos ocultos de decisión o veto distintos de los que aparezcan ostensibles en los actos que se exhiban o denuncien a la autoridad de aplicación.

Art. 29. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y siempre que los hechos o acciones no configuren delitos o infracciones contempladas en la legislación penal cambiaria, aduanera y/o tributaria sancionadas con penas más rigurosas, serán sancionados con prisión de dos (2) a ocho (8) años quienes realicen algunas de las siguientes conductas:

- a) Actúen como mandatarios ocultos o realicen cualquier índole de actos o maniobras tendientes a disimular el carácter extranjero de una inversión, permitiendo que la misma aparezca como inversión nacional a los fines de esta ley;
- b) Actúen como mandatarios ocultos o realicen cualquier índole de actos o maniobras tendientes a que una inversión de capital nacional adquiera el carácter y la protección de inversión extranjera;
- c) Realicen acciones o incurran en omisiones tendientes a alterar el valor real de los bienes radicados o a radicar con el propósito de modificar los derechos y obligaciones fijados en la presente ley y/o de ocultar las transgresiones u obviar las prohibiciones que la misma establece;
- d) Actúen como partícipes, cómplices o encubridores de las conductas a que se refieren los incisos a), b) y c). Si lo hicieran en el desempeño de tareas profesionales o de funciones públicas, su sanción llevará además la accesoria de inhabilitación por un término igual al doble de la condena. Estas sanciones no serán susceptibles de cumplimiento condicional y no procederá la excarcelación.

Art. 30. — La comisión de las conductas previstas en el artículo anterior determinará la suspensión transitoria o definitiva de los derechos emergentes de esta ley.

Art. 31. — La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas por una empresa local, receptora de la inversión extranjera, será asumida en forma conjunta y solidaria por el inversor extranjero.

Art. 32. — La autoridad de aplicación y control del cumplimiento de las radicaciones autorizadas será creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional dentro del ámbito del Ministerio de Economía y de ella dependerá un registro de inversiones extranjeras. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a contar desde su vigencia.

Art. 33. — Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las providencias necesarias para reconvertir a empresas nacionales en un plazo de tres (3) años a las que habiendo tenido este último carácter se transfirieron a inversores extranjeros mediante el procedimiento de desnacionalización a que se alude en el artículo 6º, inciso d).

Art. 34. — Esta ley es de orden público. El Estado declara que integra el concepto de orden público el principio de respeto a los compromisos estatales. En consecuencia, todo contrato de radicación llevará expresa la cláusula de que el Estado nacional renuncia a discutir a los inversores extranjeros el derecho a la repatriación de la inversión y a la remesa de dividendos que por autorización se les conceda, aunque se hubiesen dictado normas retroactivas en sentido contrario.

Art. 35. — La presente ley rige en todo el territorio de la Nación y deroga las disposiciones de la llamada ley 19.151 y los decretos reglamentarios números 2.400/72 y 7.423/73, así como toda otra norma que resulte incompatible con su vigencia. Todas las presentaciones en trámite, realizadas con anterioridad a la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, deberán adecuarse a sus normas.

Art. 36. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José B. Gelbard.

Dictamen de minería

Artículo 1º — Se suprime.

Artículo 4º — ... a la autoridad de aplicación, la que efectuará la evaluación correspondiente. Las radicaciones se instrumentarán por medio de un contrato de radicación entre dicha autoridad y los inversores extranjeros, el que deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional. La autoridad de aplicación preparará y dará a publicidad modelos de contratos y condiciones generales que luego se adaptarán en cada caso a las posibilidades de cada sector. En todo caso se asegurará la igualdad de posibilidades a todos los posibles oferentes, debiéndose proceder, siempre que se establezcan limitaciones al número de posibles radicaciones, a licitación pública.

Artículo 5º —

- h) Que no signifique condiciones preferentes que lleven al desplazamiento actual o futuro del mercado de empresas de capital nacional;
- i) Que garantice una adecuada estructura financiera para cumplir con la evolución de la actividad a que se destine.

Artículo 6º —

- c) 1. Actividades relacionadas con la defensa y seguridad nacional, como no sea en asociación con empresas del Estado u otros organismos oficiales.
- 5. ...de su propia elaboración. Se permitirán radicaciones de empresas que aporten nuevas tecnologías de distribución y comercialización, o empresas que se especialicen en la exportación de productos argentinos, pudiendo complementar esta actividad con las de importación y comercialización interna. En ambos casos estas radicaciones estarán sujetas a un plan de nacionalización que las convierta en empresas con participación de capital nacional y extranjero en el término de 15 años.

Artículo 7º — Actividades agrícolas-ganaderas y forestales, a menos que aporten nuevas tecnologías:

- a) Un programa de transformación de la empresa en empresa nacional o de participación de capital nacional y extranjero.

Artículo 10 bis. — Se autorizarán automáticamente las inversiones extranjeras que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Exporten más del 66 % de su producción o facturen el doble por ventas externas que por ventas dentro del país;
- b) Constituyan una reserva especial sobre sus ganancias que sea atribuida en un 50 % a su personal, o a su personal y sus proveedores o clientes, y en el otro 50 % a los Estados provinciales donde se encuentre radicada la empresa. Esta reserva deberá permitir la conversión de la empresa extranjera en empresa nacional en el término de 25 años.

Las empresas que se radiquen dentro de las condiciones de este artículo se denominarán empresas conjuntas y podrán acogerse a los regímenes de promoción como si fueran nacionales.

Artículo 13. — Los inversores extranjeros podrán remesar sus utilidades al exterior en la proporción que se fije en el convenio de radicación y de acuerdo a los resultados de la licitación a que se refiere el artículo 4º. El monto de esa transferencia no podrá ser mayor a la tasa del 12,5, o la que exceda en 4 puntos a la del interés que se pague, ..., considerándose para determinar el tope la tasa superior resultante de ambos supuestos. Este tope podría elevarse de acuerdo a la mecánica que se establece en artículo siguiente. No podrá efectuarse la

transferencia si existen deudas exigibles de carácter fiscal o previsional.

Artículo 13 bis. — El tope a que se refiere el artículo anterior podrá elevarse en función del aporte neto de divisas que la empresa extranjera haga con sus exportaciones. Para ello se restará el monto de las exportaciones de la empresa durante cada año calendario, las importaciones hechas directa o indirectamente para la empresa, así como los pagos al exterior que hubiere hecho por cualquier otro concepto, incluidas las remesas de utilidades y repatriaciones de capitales. Si el saldo es positivo, la empresa estará autorizada a remesar hasta la mitad de ese saldo por encima del tope señalado en el artículo anterior.

Artículo 17. — Las empresas e inversores extranjeros no podrán tener acceso a créditos subsidiados por la banca y entidades financieras existentes en el país. Para ello el Banco Central fijará periódicamente la tasa de interés real que habrán de pagar las empresas e inversionistas extranjeros, los que, por otra parte, actualizarán mensualmente el saldo de los préstamos recibidos por el índice que, de acuerdo con el Banco Central, represente mejor el proceso inflacionario.

Artículo 18. — En ningún caso podrá otorgarse al inversor extranjero tratamiento más favorable que el que se otorgue a inversores nacionales.

Artículo 19. —

- a) Sujetarse a las normas de esta ley y solicitar su registro como tales, quedando en consecuencia sometidos a su régimen (se suprime el resto).
- b) Continuar...

Artículo 21. — Queda suprimido.

Artículo 33. — Las empresas que habiendo en su momento sido nacionales, mediante el procedimiento de desnacionalización a que alude el artículo 6º incluido.

- d) Estarán obligadas a convertirse en nacionales en el término de 3 años a partir de la sanción de la presente ley.

Artículo 34. — Se suprime.

Angel Moral.

INFORME

El tratamiento de las inversiones extranjeras debe hacerse sin falsos preconceptos. Sin temerlas ni alejarlas. Simplemente regulando legalmente su funcionamiento. Pero debe evitarse hasta la mínima sospecha de que funcionarios o agentes actúen en detrimento de los intereses del país. En consecuencia, deben dictarse normas generales a las que deben someterse aque-

llos que deseen invertir y en modo alguno dejar librado a contratos particulares y negociados particularmente.

Además, debe evitarse un creciente endeudamiento externo, para lo cual debe darse preferencia a aquellas inversiones que exporten porcentajes superiores a los del consumo interno, favoreciendo así la balanza de pagos.

Parece excesiva la limitación que se establece para algunas inversiones. Si el país quisiera encarar la fabricación de aviones supersónicos o establecer plantas atómicas, a través de este proyecto no podría efectuarlo. A eso tiende la modificación que se propone en el artículo 6º, inciso c). De igual modo para otras actividades, cuando se trate de importar nuevas tecnologías.

Se proyecta también la transformación en empresas con participación de estados provinciales y de obreros, proveedores y clientes de algunas inversiones extranjeras que reviertan parte de sus utilidades con tal fin.

Debe procurarse, igualmente, que las inversiones extranjeras no utilicen créditos nacionales subsidiados. Una norma legal debe corregir ese aspecto, tal como se proyecta.

Nos parece imprudente incluir una disposición indicando que el Estado argentino respetará las reglas que se establecen. Hace a la soberanía nacional y a su dignidad hacerlo, por lo cual no debe incluirse tal disposición.

El sentido expuesto en párrafos anteriores orienta este despacho de minoría, cuyos fundamentos serán ampliados, de ser necesario, en el curso del debate.

Angel Moral.

Proyecto de ley del señor diputado Balestra y otros

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

De la inversión extranjera

Artículo 1º — Serán consideradas inversiones de capitales extranjeros aquellas cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas que ejerzan la dirección y el control efectivo de tales inversiones desde el extranjero.

Para la determinación del lugar desde el cual dicha dirección y control efectivo se ejerce, deberá tenerse en cuenta, respecto de las personas mencionadas:

- Lugar de constitución o incorporación de la sociedad.
- Sede principal de la dirección y administración.
- Lugar habitual de reunión de la asamblea de accionistas.
- Principales asientos de sus negocios.
- Vinculación jurídico-económica con otras empresas.
- Todo otro elemento que permita demostrar la procedencia extranjera de las decisiones que determinen la dirección y el control efectivo de las respectivas inversiones.

Objeto

Art. 2º — Son objeto de la presente ley aquellas inversiones de capitales extranjeros que se radiquen efectivamente en el país, en forma descentralizada, de acuerdo a las prioridades determinadas en el planeamiento nacional, provincial y regional, en nuevas actividades económicas o en la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, concurriendo a complementar el ahorro interno en el proceso de desarrollo nacional, y que se ajusten a las normas que se establecen en el presente ordenamiento.

Modos de inversión

Art. 3º — La inversión de capitales extranjeros podrá efectuarse en:

- a) Transferencias de divisas;
- b) Bienes de capital y sus repuestos;
- c) Capitalización de créditos externos;
- d) Utilidades provenientes de inversiones de capitales extranjeros, en condiciones de ser transferidas al exterior;
- e) Bienes inmateriales, de acuerdo con la legislación específica.

Las respectivas inversiones se instrumentarán mediante un convenio especial entre la sociedad receptora y el inversor extranjero que estará sujeto a la autorización del Poder Ejecutivo nacional.

De la autorización

Art. 4º — Las inversiones a que se refiere la presente ley, para gozar del tratamiento que la misma dispensa y del amparo de la legislación argentina, requerirán, en todos los casos, la previa autorización del Poder Ejecutivo nacional.

Pautas de evaluación

Art. 5º — A los efectos del otorgamiento de la autorización a que se refiere el artículo anterior, la autoridad de aplicación deberá evaluar los respectivos proyectos de inversión de acuerdo a las pautas que a continuación se establecen:

- 1º La localización geográfica de la inversión.
- 2º La medida en que contribuyan, directa o indirectamente, a la obtención o economía de divisas.
- 3º La contribución al incremento de las exportaciones, dedicando parte substancial de su producción al mercado externo.
- 4º El compromiso de reinversión de utilidades y la política propuesta sobre transferencia de las mismas y repatriación de capitales.
- 5º La utilización de recursos naturales o insumos producidos en el país.
- 6º La medida y forma en que el mercado se encuentra atendido por empresas ya existentes.
- 7º La incorporación de moderna tecnología al patrimonio nacional.
- 8º La suficiencia de la inversión para garantizar la evolución de la actividad a que se destine.
- 9º La mayor utilización de técnicos y profesionales argentinos.
10. La actividad económica a la que se destine.
11. La importancia que para el país tenga como aporte de capital.
12. Las economías de escala derivadas de la inversión.

Sin perjuicio de la oportuna evaluación realizada de conformidad con las pautas enumeradas precedentemente, la autoridad de aplicación dará preferencia a aquellas inversiones que constituyan sociedad con empresas de capital nacional.

Límites a la autorización. — Exportaciones y pago de tecnología

Art. 6º — La autoridad de aplicación no dará trámite a propuestas que:

- a) Contengan limitaciones del inversor extranjero a la exportación de los productos a elaborar por la sociedad receptora de la inversión respectiva;
- b) Comprometan pagos por cualquier concepto de transferencia de tecnología de la sociedad receptora al inversor extranjero.

Registro

Art. 7º — En el Registro de Inversiones Extranjeras, que estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley, se incorporarán:

- 1º Todas las inversiones que se aprueben en virtud de las disposiciones de la presente ley, y los movimientos de fondos que les sean imputables.
- 2º Previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales por la autoridad de aplicación:
 - a) Las inversiones aprobadas de acuerdo a las leyes 14.222, 14.780, 18.587 y 19.151, y los movimientos de fondos que les sean imputables;
 - b) Las radicaciones efectuadas al amparo de decretos y circulares que específicamente se refieran a inversiones de capital extranjero, en el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 1957 y la entrada en vigencia de la ley 14.780, y los movimientos de fondos que les sean imputables;
 - c) Las inversiones ingresadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.222, al amparo de la Constitución y las leyes nacionales, y los movimientos de fondos que les sean imputables.

La inscripción en el registro precitado será requisito indispensable para que los respectivos inversores puedan gozar de los beneficios que establece el artículo 9º de la presente ley.

Tipo de cambio para la registración

Art. 8º — Las inversiones que se registren en virtud de la presente ley deberán serlo al tipo de cambio que rige en el mercado oficial considerando:

- a) Para transferencias de divisas, la fecha de la remesa;
- b) Para los bienes de capital y sus repuestos, la fecha de su despacho a plaza. Para su determinación se tomará el valor corriente en divisas en el mercado de exportación, o el vigente en el mercado interno del país de origen si fuera menor;
- c) Para la capitalización de créditos externos, el día de su capitalización;
- d) Para la inversión de utilidades, la fecha en que se efectúan;

- e) Para los bienes inmateriales, la fecha de su incorporación al Registro de Inversiones Extranjeras.

Beneficios

Art. 9º — El capital procedente del exterior que se invierta y registre en el país de acuerdo con la presente ley, gozará de los siguientes beneficios:

- a) El inversor podrá transferir a partir del cierre del primer ejercicio de la empresa las utilidades líquidas y realizadas, hasta un porcentaje máximo anual del capital invertido que se determinará por ley especial de acuerdo a los resultados que arroje el análisis de los datos obrantes en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y en las condiciones que se establezcan en oportunidad de aprobarse la inversión;
- b) Las utilidades no transferidas en ejercicio del derecho acordado por el inciso precedente podrán:
 - 1º Ser invertidas en la sociedad receptora de la inversión original o en otras sociedades receptoras, previa autorización del Poder Ejecutivo nacional.
 - 2º Ser depositadas a plazo fijo en el Banco Nacional de Desarrollo, vencido el cual el inversor extranjero podrá disponer libremente de las mismas.
 - 3º Acumularse en una cuenta especial de reserva. Estas utilidades podrán transferirse al exterior en las condiciones que se establezcan en oportunidad de aprobarse la inversión. Las que definitivamente no se remitieran podrán ser destinadas a cualesquiera de los demás objetos previstos en el presente inciso. En todos los casos, deberá informarse a la autoridad de aplicación sobre la decisión adoptada y el estado del trámite respectivo.
- c) El inversor podrá repatriar el capital registrado, previa comunicación a la autoridad de aplicación, en los siguientes supuestos:
 - 1º Cuando se cumplan las condiciones establecidas al ser aprobada la inversión. En todos los casos de repatriación del capital, deberá asegurarse la continuidad de la actividad objeto de la inversión respectiva, y especialmente de la fuente de trabajo por ella generada. Las modalidades de repatriación del capital serán establecidas por una ley especial, de acuerdo a los resultados que arroje el análisis de los datos obrantes en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
 - 2º Cuando transfiera sus acciones o cuotas de capital a los adquirentes aludidos en el artículo 12, inciso b), de esta ley.
 - 3º Cuando se liquide la sociedad receptora de la inversión extranjera.

Tipo de cambio para la transferencia de utilidades y repatriación del capital

Art. 10. — En los casos de los incisos a) y c) del artículo 9º, el tipo de cambio aplicable a las referidas operaciones será el tipo vendedor que rija en el mercado oficial al momento de efectuarse las mismas.

Crédito bancario

Art. 11. — La utilización de crédito bancario interno por parte de sociedades con mayoría de capital registrado se limitará al crédito a corto plazo o de evolución y a los créditos destinados al financiamiento de exportaciones.

De las acciones y su transferencia

Art. 12. — Las acciones o cuotas de capital correspondiente a la inversión registrada no podrán conferir voto múltiple a sus titulares y deberán ser nominativas durante los primeros cinco años. La firma inversora recibirá, como contrapartida de su inversión, acciones o cuotas de capital de la sociedad receptora, a un valor no inferior al nominal. En todos los casos, podrán ser transferidas previa comunicación a la autoridad de aplicación, conforme a las siguientes modalidades.

- a) Cuando la transferencia se efectúe a favor de adquirentes que deseen conservar la pertinente inscripción en el Registro de Inversiones Extranjeras, dichos adquirentes deberán solicitar previamente a la autoridad de aplicación la autorización respectiva para realizar la operación;
- b) En el supuesto de que los nuevos adquirentes no hubiesen solicitado dicha autorización, como así mismo en el caso de que ésta fuese denegada por la autoridad de aplicación, la parte correspondiente al capital transferido será excluida del Registro de Inversiones Extranjeras.

Personal directivo

Art. 13. — Las sociedades receptoras de inversiones extranjeras aprobadas de acuerdo con la presente ley deberán emplear en las áreas de dirección, técnica y profesional un porcentaje mínimo promedio del 85 % de argentinos

La autoridad de aplicación podrá autorizar una proporción menor para los tres primeros años en los casos en que, por la naturaleza de la actividad, no pudiera obtenerse personal argentino especializado en las cantidades exigidas.

Publicidad

Art. 14. — Al iniciarse el trámite de inversión, deberá darse amplia publicidad a la propuesta, sin perjudicar el secreto comercial de los proponentes.

Verificaciones

Art. 15. — La autoridad de aplicación adoptará los recaudos necesarios para verificar el origen extranjero de los capitales que se inviertan, su correcta aplicación a los fines específicos de la inversión, como así mismo a fin de evitar que dichos capitales afecten el desenvolvimiento normal de las empresas locales preexistentes, cuya evolución debe asegurarse en orden a su capacidad y eficiencia.

Actividades militares

Art. 16. — La autoridad de aplicación no dará trámite a propuestas que se destinen a la producción de elementos directamente vinculados a las actividades

militares, sin la intervención del Ministerio de Defensa.

Plazo de resolución

Art. 17. — El Poder Ejecutivo nacional deberá expedirse sobre las propuestas de inversión extranjera que se formulen dentro de un plazo máximo de ciento ochenta días a contar de la fecha de su presentación. La reglamentación establecerá el procedimiento administrativo a que se sujetará la autoridad de aplicación para que el pronunciamiento del Poder Ejecutivo nacional sobre la inversión se dicte en el plazo establecido.

Acogimiento a otros regímenes

Art. 18. — Las sociedades incorporadas al régimen de la presente ley podrán acogerse a los regímenes de promoción sectorial o regional vigentes o que se dicten en el futuro, en las condiciones que los mismos indiquen. En tales casos, la acumulación de los respectivos beneficios no podrá colocarlos en mejor situación que las sociedades locales de capital no registrado.

Pérdida de derechos y sanciones

Art. 19. — El incumplimiento de las disposiciones del decreto aprobatorio de inversión, por causas imputables al inversor, dará lugar a la pérdida de los derechos que le acuerda esta ley y su eliminación del Registro de Inversiones Extranjeras, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que pudieran corresponder dentro de los regímenes especiales propios de cada inversión. A tal efecto, la autoridad de aplicación, previa comprobación de la circunstancia señalada, propondrá al Poder Ejecutivo nacional el dictado del correspondiente decreto.

Extensión de la responsabilidad

Art. 20. — La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el convenio de inversión por el inversor extranjero será asumida en forma conjunta y solidaria por dicho inversor extranjero en proporción al monto efectivo de su aporte.

Derecho aplicable y jurisdicción competente

Art. 21. — A la inversión extranjera le serán aplicadas las cláusulas contractualmente convenidas por las partes en el respectivo convenio y supletoriamente las normas en vigor del derecho argentino.

Sólo serán competentes para entender en todas las divergencias entre las partes resultantes de la interpretación del convenio de inversión extranjera los tribunales federales de la República de la jurisdicción respectiva.

Inversiones anteriores

Art. 22. — El Banco Central de la República Argentina suspenderá las remesas al exterior por conceptos de repatriación de capital o transferencias de utilidades de inversiones anteriores hasta tanto una ley especial fije las respectivas modalidades para dichos casos. Sin perjuicio de ello, en todos los casos habrán de respetarse los derechos adquiridos al amparo de la Constitución y la ley.

Autoridad de aplicación

Art. 23. — La reglamentación de la presente ley establecerá todo lo relativo a la autoridad de aplicación.

Derogaciones

Art. 24. — Quedan derogadas la ley 19.151 y todas las disposiciones legales que se opongan a la presente.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ricardo Ramón Balestra. — Juan Pedro Llano. — Tomás Ameghino Arbo.

Sr. Presidente (Odena). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Gualco.

Sr. Gualco. — Señor presidente: en estos momentos muy difíciles para la República —sobre todo por los acontecimientos de las últimas horas— nos enfrentamos con el análisis y la sanción de una ley que se vincula con toda una política global. Nos hallamos abocados al tratamiento de un proyecto que, de sancionarse, significará haber dado un paso más en el camino de la liberación.

El concepto de capital extranjero es el de que debe constituir un aporte que coadyuve al desarrollo, y siempre y cuando estimule la capitalización del país.

Sobre la base de tal filosofía se ha trabajado durante arduas jornadas, para arribar finalmente al dictamen que consideramos. Por esta ley se trata de poner fin a una discriminación privilegiada, la que hasta el día de hoy ha gozado el capital extranjero frente al nacional. En esta ley hemos adecuado las actividades de las empresas multinacionales al interés de nuestro país. También por esta ley procuramos solucionar uno de los más graves problemas que tiene nuestra industria: las crisis cíclicas que sufre nuestra balanza de pagos. Además, se establece el sano principio de que cuando la inversión extranjera es mayoritaria, esa radicación —que no puede prestarse a ningún tipo de suspicacias— sea tratada expresamente por el Congreso.

Nuestra América, que está luchando por su independencia económica, ve permanentemente perturbados sus balances de pagos. La Organización de Estados Americanos ha publicado una estadística que establece que desde 1950 hasta 1968 las nuevas inversiones extranjeras suman 3.921 millones de dólares; mientras tanto, las remesas de utilidades han llegado a 12.819 millones de dólares. Esto significa que la legislación de la América latina ha servido para que por cada dólar que entrase saliesen tres; es decir, una legislación que ha servido para terminar de sojuzgarla.

Frente a esta situación tendríamos que hacer un análisis técnico de la ley que estamos tratando. Sin embargo, muchas veces es difícil hablar de técnica cuando el país está conmocionado por hechos políticos que obligan a dejar la técnica de lado, porque lo que se está jugando es

el ser nacional. Frente a esto, consideramos que el mejor informe que se puede hacer sobre este proyecto de ley es una respuesta adecuada a la embajada de los Estados Unidos, y así lo va a hacer el bloque de la mayoría.

En los diarios de la fecha se transcribe el memorándum que se envió al ministro Gelbard. Allí se dice: «En general, el régimen legal que se establecería sólo parece ofrecer restricciones a las actividades de los inversores extranjeros. No contiene incentivo de importancia que tornaría más y no menos atractivo para asumir riesgos de inversiones en la economía argentina». Coincidimos con la embajada de los Estados Unidos porque, efectivamente, esta ley no ofrece los atractivos de otras leyes que hemos tenido vigentes, y porque esta ley no sirve para la dependencia. Ese es el problema capital. Y digo que es el problema capital porque ésta no es una acusación nueva. Ante el Acuerdo de Cartagena y la resolución 24, la reunión de *The Council of America*, que es el grupo que reúne a las grandes empresas multinacionales, acusó en la misma forma que ahora se hace a los países integrantes del Pacto Andino.

Fijense los señores diputados qué caso notable: ayer en esta Cámara se hizo un homenaje a un juez, el doctor Lozada, y anoche la Corte Suprema fijó y defendió la soberanía argentina porque el alto tribunal, en el caso Parke-Davis, empresa multinacional que venía despojando al país, falló en contra de la empresa. Así fue resuelto este expediente que durmió durante tantos años en la justicia y así se rechazaron las pretensiones de la empresa Parke-Davis de la Argentina, que pagaba *royalties* a Parke-Davis de los Estados Unidos, mientras que esta última empresa tenía el 95 por ciento de las acciones de la primera, y ese cinco por ciento pertenecía a argentinos, porque en la Argentina, de acuerdo con la ley general de sociedades anónimas, para integrar el directorio es necesario tener acciones de la empresa. Esos privilegios de que habla el embajador de los Estados Unidos se están acabando, y por suerte nuestra Corte Suprema puso anoche las cosas en su lugar.

En otra parte de la nota se dice: «Más específicamente, la ley exigiría que las inversiones extranjeras se desprendan de cualquier interés mayoritario virtualmente en cualquier empresa». Esto no es cierto; no hay aquí ninguna obligación legal para que pierdan el interés mayoritario; lo que sí hay son ventajas cuando el capital nacional es mayoritario en una empresa mixta. Tampoco es cierto que las inversiones extranjeras vayan a perder interés, por cuanto las declaraciones de ayer del ministro Gelbard demuestran el interés de radicarse que tienen capitales de otros países del mundo. Además, en los países del Pacto Andino hoy están ingresando capitales de todas las partes del mundo en las condiciones que establece la resolución 24.

En otra parte se dice lo siguiente: «Aparentemente se esperaría que los nuevos inversores extranjeros arriesguen su capital en la Argentina sin la perspectiva de mantener la efectiva dirección técnica en la conducción de las actividades que estarían financiando». De ellos es el problema; por lo tanto, si no les gusta venir en las condiciones de esta nueva ley, que no vengán.

Hay otro párrafo donde se dice: «El despojo exigido a los inversores anteriores también perjudicaría a los esfuerzos del gobierno argentino por atraer más inversiones de dichas fuentes en el exterior, y arriesgaría la contracción de la actividad económica en los sectores que ahora se encuentran amparados por las inversiones extranjeras». Aquí, lo más grave de esta acusación es el «despojo exigido». Acá no estamos despojando a nadie, por lo que me gustaría que el representante de los Estados Unidos clarificara a qué despojo se refiere, porque reitero que en esta ley no hay despojo de ninguna índole.

Más adelante se agrega: «La fijación de límites máximos para la repatriación de utilidades también tendría un efecto desalentador». Esto está totalmente invalidado, porque en el caso Parke-Davis, que acaba de fallar la Corte Suprema, se demostró que los dividendos salían vía regalías. Por eso la preocupación de los señores diputados que exigieron que se incluyera en el dictamen de comisión un nuevo artículo, que lleva el número 36, que dice: «Dentro de los sesenta días de la fecha de aplicación de esta ley el Poder Ejecutivo elevará al Honorable Congreso un proyecto de ley que regule el monto de las remesas por servicios tecnológicos, *royalties*, regalías y otros conceptos, como comisiones, honorarios, que impliquen erogaciones en moneda extranjera correspondientes a empresas nacionales, mixtas o extranjeras».

Al respecto, sin conocer el fallo de la Corte Suprema, en las reuniones que celebramos en las comisiones veíamos el peligro de este canal de drenaje de divisas. Por lo tanto, no nos engañábamos cuando fijábamos el límite del 12,5 por ciento con respecto a la transferencia de utilidades. Con esto ha quedado demostrado que la viva preocupación de todos los señores diputados al solicitar la inclusión del artículo a que hice referencia, estaba totalmente justificada. Lo que nunca pudimos pensar es que los hechos nos iban a dar la razón tan rápidamente.

En otro párrafo se dice que los límites específicos expuestos en el proyecto de ley son más bajos que las tasas que los inversores extranjeros han podido realizar por medio de operaciones lícitas en Europa, Asia y otras áreas de América latina. Esto sólo, puede desviar posibles fuentes de inversión de la Argentina a estas otras áreas.

América latina tiene dos líneas de desarrollo: una, la que fija el Pacto Andino y otra, la que fija Brasil; o sea, la línea de la liberación y la

línea de la dependencia, respectivamente. Frente a eso, nosotros hemos optado por la línea del Pacto Andino, es decir, la línea de la liberación. Por estas razones, la embajada de los Estados Unidos habla de algunas zonas de América latina, y no de otras. Pero sería muy triste que la Argentina adopte la línea de la dependencia, como es el caso de la hermana república del Brasil. Esa línea le significó en 1970, en concepto de servicios, el giro al exterior de 845 millones de dólares; en el año 1971, 975 millones de dólares y, en el año 1972, 1.290 millones de dólares. ¡Pobre Brasil! Frente a esa situación, hemos elegido nuestro camino.

Además, en otra parte se dice que deberá incluirse una clara referencia que permita la revaluación de los activos para contrarrestar los efectos de la inflación y la posibilidad de la descapitalización.

Esta mañana hemos aprobado la nacionalización de los depósitos bancarios. Queremos ser dueños del valor de nuestra moneda, y ningún gobierno extranjero va a fijar revaluaciones de activos por medio de una ley de inversiones. Ni ahora ni nunca.

También se dice que la situación dejaría al inversor extranjero con una posibilidad tan mínima de inversión que los riesgos de colocar capital en la Argentina llegarían a ser demasiado elevados. En consecuencia, es muy probable que esa inversión no se efectúe. Esto estaría entroncado con la velada amenaza anterior, de que se resentirían nuestros créditos internacionales.

Creo que llegó la hora de que América latina replantee toda la política de «créditos atados» con lo cual nos están sojuzgando desde el exterior. Esos «créditos atados» en el fondo son ventas con pago diferido, porque desde el momento que se da un crédito que obliga a comprar en determinado país, lo que se está contratando no es más que una venta con pago diferido.

Posiblemente, el ex subsecretario Vázquez, cuando en Lima fijó una posición en el sentido que la Organización de Estados Americanos ha perdido razón de ser en el contexto americano y debe ser reemplazada por una Organización de Estados Latinoamericanos, tal vez indicaba que había llegado la hora de decir si el Banco Interamericano de Desarrollo cumple su función en defensa de los intereses latinoamericanos o de los intereses norteamericanos. Tal vez esto ayude a decidimos a fundar un banco latinoamericano; esto es importante, porque cuando uno se queda y lo agujonean, lo despiertan.

En otra parte se dice: «La efectividad de esta disposición destinada a asegurar la provisión de crédito a las empresas nacionales serán neutralizadas por el efecto que tendrían las medidas que desalientan el ingreso del capital extranjero en la Argentina.»

En la época de la llamada revolución argentina, la inversión directa fue de 19 millones de dólares anuales, pero ahora tendríamos que decir que se acabó la época en que la Argentina estaba ilusionada con estas cosas. Ya no compramos más sofismas.

Con esta política nacionalista de defensa del trabajo y de la empresa argentina pensamos levantar al país con nuestro propio esfuerzo; y va a alcanzar por la sencilla razón de que ahora no va a salir más al exterior el esfuerzo argentino, sino que va a quedar en el país y no va a ser más explotado y aprovechado por las empresas multinacionales.

El proyecto se refiere a la prohibición absoluta de realizar inversiones extranjeras en ciertos sectores específicos. Vamos a analizar, señores diputados, cuáles son los sectores que afectan las prácticas tradicionales. En primer lugar, las actividades relacionadas con la defensa y la seguridad nacional: lo único que falta es que venga como comandante en jefe del Ejército argentino el general Mac Arthur.

El segundo sector comprende los servicios públicos, entendiéndose por tales el proceso de servicios sanitarios, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios postales, vale decir, toda nuestra infraestructura. Ya hemos superado el siglo pasado durante el cual manejaron nuestra infraestructura, lo cual originó no solamente la dependencia, sino esta hipertrofia que todavía hace quejarse en esta Cámara a los diputados de las distintas provincias. Nuestra infraestructura no puede quedar sometida en ningún caso a los intereses extranjeros.

El tercer sector se refiere a seguros, banca comercial y actividades financieras. En la mañana de hoy ya hemos tomado una resolución al respecto.

El cuarto sector incluye publicidad, radioemisoras y estaciones de televisión, diarios, revistas y editoriales y otros medios de comunicación masiva. Aceptar la inversión extranjera en estos campos, equivaldría a admitir el colonaje ideológico. No se conquista un país desde el punto de vista económico si previamente no se lo consigue desde el punto de vista ideológico. En esto intervienen los nuevos cipayos, los gerentes aprovechados de las empresas extranjeras, en fin, aquellos que lucran con la miseria del país. La Argentina ha optado por el camino de la liberación y no va a admitir que intereses foráneos manejen los medios masivos de comunicación.

Otro sector en el que no se admitirán nuevas radicaciones figura en el punto 5 del artículo 6º y se refiere a los servicios de comercialización interna de productos de cualquier índole, con exclusión de los de su propia elaboración. Como puede verse, se trata del problema del manejo de la comercialización interna.

El punto 6 se relaciona con las actividades que por ley estén reservadas a empresas estatales o empresas de capital nacional, sin perjuicio

de las normas que fijen para la subcontratación con empresas privadas. Esto es para que los ministros de Economía no alientan ideas contrarias que conspiran contra el ser nacional y que sólo caben en mentes enfermizas.

El punto 7 abarca las actividades agrícola-ganaderas y forestales, salvo las que incorporen tecnología nueva de especial interés para la economía nacional. Este es el problema de todo un sistema armado para la producción de alimentos con dependencia tecnológica del exterior, como ocurre actualmente con el negocio de los pollos. El incremento de una producción de esa naturaleza acentuaría la dependencia con el exterior, dándose la paradoja de que mientras más comamos los argentinos más estaríamos dependiendo del exterior.

El punto 8 se refiere a la pesca, excepto cuando posibilite el ingreso de la producción a mercados internacionales cerrados. El problema de la pesca es muy importante. Los señores diputados saben que nuestros mares epicontinentales constituyen la tierra de nadie, dado que a ellos vienen a pescar buques de distintas banderas, ya sea de China, Japón, Rusia, Brasil, etcétera. Nadie se queda atrás. Y si será negocio hacerlo, que aguantan el flete de ida y el de vuelta. Queremos defender nuestra producción, y si alguna vez hay que pescar, ese pescado lo venderemos nosotros y nos conformaremos con que tengan que pagar autorizaciones de pesca.

Este es un problema que conmueve a toda Latinoamérica, y si analizamos el secuestro de buques dentro de las trescientas millas en todas las costas latinoamericanas, se darán cuenta de que esto es sólo una parte del problema que tiene América latina.

La parte final del memorándum en que se expresa la inquietud de esa embajada extranjera, dice: «Es probable que no se encuentren disponibles cantidades suficientes de capital nacional para continuar un nivel deseable de actividad de las áreas si se excluye el capital extranjero.»

Ya hemos dicho que la República Argentina posiblemente sea el único caso en América latina de un país que posee un coeficiente suficiente de inversión interna y puede autoabastecerse de capitales, siempre y cuando cerremos los canales por los cuales se succiona hacia el exterior una buena parte de nuestra producción.

Es por ello que todo esto significa una toma de posición. Consideramos que esta ley es la principal respuesta a la embajada norteamericana y, porque estamos precisamente en desacuerdo, es que tenemos la seguridad de que vamos por el buen camino.

La radicación de empresas extranjeras en la forma que ha sido llevada hasta el presente significa que para estas empresas la Nación no es una tarea a emprender, ni una bandera a defender, ni un destino a conquistar. La Nación

es nada más que un obstáculo a salvar, porque a veces la soberanía incomoda. Y esta Nación, hoy, va a decidir ser soberana. (*Prolongados aplausos.*)

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Señor presidente: ha llegado a estudio de este honorable cuerpo un proyecto del Poder Ejecutivo sobre inversiones extranjeras. Esta es una materia trascendente que cuestiona de manera fundamental la soberanía de la Nación, y en la cual la gran mayoría de las voluntades políticas del país se dispone a afianzar celosamente el principio de la soberanía jurídica y política, que no podrá ser amenazada de modo alguno por el interés privado de las empresas multinacionales, cualesquiera fuesen, ni mucho menos por la acción de grosera interferencia de un Estado extranjero, cualquiera sea su poderío, en los derechos que son de legítima pertenencia y titularidad del Estado argentino.

Para ubicarnos en el tema, debo decir que esta materia de la inversión extranjera se integra en otra más vasta y compleja, que es la de la relación económica internacional legislada, fundamentalmente, en el ámbito del derecho internacional privado.

En ese sentido, y dentro de las modalidades en que esta disciplina jurídica se desenvuelve, previamente debemos ubicarla en el encuadre de técnica legislativa que corresponde.

El derecho privado internacional, a través del derecho regulador de la economía internacional y del comercio internacional, puede actuar en forma de normas jurídicas indirectas que regulan el conflicto de leyes, o puede desempeñarse mediante normas directas que estableciendo el marco en que se desenvuelve el derecho de extranjería, discrimina atribuciones, facultades e intereses legítimos de los nacionales y extranjeros. Y así debe enunciarse el principio general de este tipo de relación de derecho privado con elementos extranjeros en su seno que tiene como finalidad asegurar la certeza y la seguridad de las relaciones extraterritoriales que, en el caso de conflicto de leyes, establecen como materia de excepción la limitación del orden público internacional y que en el caso del derecho de extranjería necesita precisar, por lo novedoso de esta disciplina, el marco en que este orden público internacional se desenvuelve.

Siendo tan delicada la tarea de legislar en esta materia, tiene el riesgo en que el desafío de los tiempos coloca la actividad que le compete. Exagerar la defensa del criterio de orden público puede conducir a debilitar el principio de la seguridad de las relaciones jurídicas. A su vez, poner el énfasis en este último aspecto puede conducir a resquebrajar el interés público de los Estados que, cuando son países receptores de capital extranjero, generalmente países

en vías de desarrollo, ven peligrosamente amenazada la soberanía local.

Y esta materia se integra naturalmente con los otros capítulos fundamentales del derecho de las relaciones económicas internacionales. En primer lugar, se integra con la actuación de las empresas multinacionales que son habitualmente los sujetos radicadores de capitales, o sea, los titulares de las inversiones extranjeras en la gran mayoría de los casos.

En segundo lugar, se vincula también con el régimen de las contrataciones financieras y de los convenios y empréstitos internacionales, mecanismos mediante los cuales se establece un sistema de préstamos que es el sucedáneo y a veces el sustituto de las radicaciones como forma de aporte efectivo.

Comprende, en tercer lugar, quizás el mecanismo más sólido de defensa para los países receptores de capital con lo cual mejor auxilian a la defensa de sus propios intereses, que es la constitución del bloque económico, forma de integración que en nuestra América latina es reconocida como una urgente necesidad de la solidaridad.

Y en este ámbito es donde debemos ocuparnos del derecho de los extranjeros para establecer cómo surgen las diferencias de la realidad social y económica y cómo el derecho, haciéndose cargo de estas diferencias, debe regularlas con prudencia no exenta de firmeza y con precisión no despojada del tecnicismo necesario.

En 1876, el entonces canciller de la República, doctor Bernardo de Irigoyen, frente a la pretensión del Banco de Londres, con sede en Rosario, que pretendía desconocer una intimación del gobierno de la provincia para la conversión de su moneda, logró definir lo que sería la llamada tesis argentina en materia de nacionalidad de las sociedades, que luego sería adoptada en forma generalizada por los países latinoamericanos.

En esa oportunidad, cuando se requirió la protección diplomática del Reino Unido en razón de considerar al banco en cuestión un súbdito de nacionalidad inglesa, el entonces canciller argentino sostuvo que esto no tenía cabida alguna frente a nuestro derecho, porque las sociedades de capital, como lo expresara Bernardo de Irigoyen, no tienen nacionalidad desde el punto de vista práctico, pues sus acciones se trasladan de mano en mano, resultando casi imposible la individualización por su carácter de anónimas; y desde el punto de vista jurídico, porque deben su existencia a la ley del Estado que las autoriza y de ningún modo pueden pretender una nacionalidad extranjera, que a su vez surte el efecto del exorbitante recurso de la protección diplomática.

Pero ocurre que en el mundo moderno y por las transformaciones que acompañaron las consecuencias de las grandes conflagraciones bélicas de nuestro siglo, aparece en tiempo de guerra.

elaborada por los juristas del Viejo Mundo en primer término, recogida por los países anglosajones en segundo lugar y, finalmente, por los propios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, a mediados de la década del cuarenta y a la finalización de la segunda guerra mundial, la llamada teoría del control. Esta teoría y práctica, en su consecuencia, consiste en la determinación del carácter que una sociedad asume para definir el derecho que la regula, mediante el previo reconocimiento de quiénes son los efectivos titulares del capital y de la dirección de dicha sociedad más que la nacionalidad de sus socios o el lugar de suscripción de sus acciones; antes que el sitio donde funcione, la sede esporádica de su directorio o asamblea. Es fundamental atenerse a aquel otro sitio establecido como punto de conexión del derecho privado internacional, de donde parten las órdenes efectivas, desde donde se ejerce la dirección estable, desde donde se realiza el efectivo control de la empresa o sociedad.

En virtud de esta teoría del control, que tiende a reconocer la dirección de la sociedad por medio de sus titulares, penetrando, si es preciso, en la esencia de su personalidad para descender los velos que en forma de fraude a la ley pueden desvirtuar su real naturaleza, se puede establecer la verdadera identidad y responsabilidad de las mencionadas empresas multinacionales.

Hay dos casos de actuación de estas empresas multinacionales muy sonados en estos últimos años, que han requerido el interés de la opinión pública y la atención directa de los organismos jurisdiccionales, así como la preocupación de los políticos. A uno de ellos se refirió el colega que me precedió en el uso de la palabra. Son, en primer término, el caso Swift-Deltec y, en segundo lugar, el caso Parke-Davis. A su turno veremos las implicancias jurídicas y doctrinarias derivadas de ambos y la relación que guardan con los proyectos que legislan en materia de inversiones extranjeras.

Pero volviendo al punto inicial de la discusión, ¿cuáles son los límites del orden público en el campo de las inversiones, en cuanto al trato al inversor extranjero? ¿Existe una competencia excepcional, o es una competencia normal? Es decir, ¿dentro de qué modalidades debe desempeñarse la concepción del orden público?

En tal sentido, un grupo de diputados de partidos provinciales hemos presentado a la consideración de esta Honorable Cámara un proyecto de ley sobre inversiones extranjeras, en el que se receptan las más modernas concepciones en materia jurídica internacional, recogiendo la realidad nacional y tomando el ejemplo que inaugura la nueva política argentina, en cuanto a inversiones extranjeras, en el convenio con Saab-Scania. Debe dejarse constancia de que algunas disposiciones fundamentales del proyecto del Poder Ejecutivo han sido tomadas precisamente de este conve-

nio, cuya modalidad contractual también es adoptada para establecer en el futuro cómo ha de regirse la relación económica internacional de las inversiones extranjeras.

Este tema tiene un dinamismo muy propio. Parte de algunas necesidades precisas que hacen a la seguridad jurídica del inversor y al interés del Estado receptor, de lo cual deriva toda la concepción del orden público, cuyos límites nos proponemos establecer con claridad para asegurar así un marco jurídico tanto adecuado al interés nacional como idóneo para procurar la permanencia y estabilidad que permita el flujo al país de inversiones extranjeras.

Uno de los temas más arduos es la definición de la inversión extranjera, y para ello hemos recurrido a la teoría del control que un grupo numeroso de juristas de Europa continental y de América latina, especialmente de la Argentina, ha sostenido que debe incorporarse definitivamente en las modalidades de la legislación, por ser el instrumento más idóneo, pues supera la vieja antinomia de estatismo o exagerada libertad económica y procura encontrar la solución justa entre los intereses de orden público del Estado y la necesidad del dinamismo comercial que exigen las empresas privadas.

De acuerdo con la aplicación práctica de esta teoría del control, definimos como inversiones de capital extranjero aquellas cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas que ejerzan la dirección y el control efectivo de tales inversiones desde el extranjero. Para determinar este lugar se atiende, entre otros aspectos, a la constitución o incorporación de las sociedades —esto está tomado del régimen jurídico anglosajón, donde adquieren su personalidad jurídica o su derecho a actuar las sociedades por un acto administrativo o parlamentario—, al lugar donde estuviere la sede principal de la dirección y administración, y no el asiento principal de los negocios, como erróneamente ha establecido el proyecto del Poder Ejecutivo, porque éste es de equívoca determinación, ya que las empresas multinacionales tienen muchos asientos y pueden cuestionar el que se considera principal, mientras que la sede principal de la dirección y administración es más fácil de individualizar. Para determinar ese lugar también se atiende al sitio habitual de las reuniones de las asambleas de accionistas, en el caso de que hubiera disparidad entre el lugar donde funcionan el directorio y la asamblea, o los principales asientos de los negocios, la vinculación jurídico-económica con otras empresas; y, por último, todo otro elemento que permita demostrar la procedencia extranjera de las decisiones que determinen la dirección y el control efectivo de sus respectivas inversiones.

Se cubren así todos los aspectos posibles en que puede desenvolverse el marco de la relación jurídica de las empresas filiales con su casa matriz, o dicho de modo jurídico más preciso,

entre las sociedades receptoras y el inversor extranjero.

El segundo aspecto, no menos importante y fundamental para la precisión jurídica de la materia, es una clara determinación del objeto de la inversión extranjera. En tal sentido, entendemos que es objeto de esta ley contemplar aquellas inversiones de capital extranjero que efectivamente se radiquen en el país. Este principio de la radicación efectiva es fundamental y reemplaza el método habitual de contratación, pues este último significa grandes erogaciones en cuanto a *royalties*, problema éste al que ya se refiriera el señor miembro informante y al que luego también habremos de referirnos nosotros cuando consideremos el artículo específico.

También adherimos al criterio básico y prioritario de que estas inversiones deben realizarse en forma descentralizada, de acuerdo con los objetivos principales determinados en el planeamiento nacional, provincial y regional. Hemos presentado a esta Honorable Cámara un proyecto según el cual el planeamiento nacional —cuyas bases no han sido aún elaboradas y enviadas a este Poder Legislativo— debe ser determinado de común acuerdo entre la Nación y las provincias, deslindándose así, en forma clara, el ejercicio de facultades constitucionales concurrentes entre el poder central y los entes autónomos soberanos. Estos últimos, según la Ley Fundamental, tienen el derecho a proveer todo lo conducente al bienestar general mediante el adelanto de la industria y la importación también de capitales extranjeros.

Las radicaciones deben afectarse a nuevas actividades económicas o a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes. Una ley idónea en esta materia debe jugar armónicamente con una ley de promoción industrial. No pueden admitirse radicaciones en forma arbitraria; la promoción de la industria debe, fundamentalmente, quedar reservada al capital nacional, y cuando se admita complementariamente participación de capital extranjero insistimos en que ésta puede darse en una actividad aún no desarrollada.

Concurrentemente, estas inversiones deben estar destinadas a complementar el ahorro interno, ajustándose en un todo a las normas proyectadas para el proceso del desarrollo nacional. Allí donde el ahorro interno sea suficiente, resulta ociosa la intervención del capital extranjero.

Otro aspecto de relevancia en esta materia lo constituyen los modos de la inversión, los establecidos en la legislación vigente y los proyectados también en el régimen remitido por el Poder Ejecutivo. Son las transferencias de divisas, los bienes de capital y su reposición, la capitalización de los créditos internos, las utilidades provenientes de inversiones anteriores que se traducen como forma de capital con arte-

glo al nuevo proyecto y, en último lugar, los bienes inmateriales, de acuerdo con la legislación específica.

Reiteradamente hemos sostenido que no puede desalojarse de una ley de inversiones extranjeras a los bienes inmateriales y los aportes tecnológicos. Es preferible que ingresen al país en forma de real y efectivo aporte de capital y no en virtud de contrataciones, arriendos o préstamos que luego devengarán pagos al exterior para la transferencia de amortizaciones y de intereses, lo que constituiría —como ya ha ocurrido— una verdadera sangría para la balanza de pagos del país, con todos los perjuicios consiguientes.

A la reactualización de estos bienes inmateriales debe suceder naturalmente lo que se estableció por primera vez en el convenio Saab-Scania, que es la prohibición de remitir sumas al inversor extranjero por la sociedad receptora en concepto de transferencia de tecnología. Como también lo estableció la Corte Suprema en el caso Parke-Davis, y como no lo estableció el Poder Ejecutivo en el proyecto remitido al Honorable Congreso.

Agregamos que las respectivas inversiones se instrumentarán mediante un convenio especial, que en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se lo denomina contrato. Estamos de acuerdo con el criterio aplicado en el artículo 49, en el sentido de que entre la sociedad receptora y el inversor extranjero debe mediar la aprobación del Poder Ejecutivo nacional. Creemos, señor presidente, que la autorización del Poder Ejecutivo nacional es suficiente. No importa que el Poder Ejecutivo esté ejercido por un sector político cuya opinión es distinta de la que nosotros profesamos. Es suficiente —repito— la aprobación del Poder Ejecutivo, porque solo él cuenta con los medios técnicos e idóneos para evaluar debidamente el proyecto de inversión extranjera, al que además debe darle la debida publicidad, con lo cual podrá cumplirse el control del Honorable Congreso. Por otra parte, la negociación de la inversión extranjera se vería considerablemente obstaculizada si se requiriese una ley del Congreso, pues éste no contaría con los elementos técnicos necesarios como para debatir un convenio de este tipo.

Se establece también en este proyecto el requisito de la autorización de la inversión extranjera sobre la base de pautas de evaluación precisas, que se ordenan en una enumeración indicativa y prioritaria. En primer lugar, la localización geográfica de la inversión, porque entendemos que ella debe ser descentralizada, para llevar el alicio del capital extranjero a todos los rincones del país.

En segundo lugar, se contempla la medida en que contribuyan directa o indirectamente a la obtención o economía de divisas. Este principio fue recogido también en el año 1953, cuando se sancionó la ley 14.222, y mantenido en la legis-

lación del derecho comparado y en la legislación argentina vigente.

En tercer lugar, debe analizarse la contribución al incremento de las exportaciones, dedicando parte substancial de su producción al mercado externo, puesto que la actividad exportadora es básica para dotar al país de sus divisas y, además, como factor de estímulo idóneo para propender a un incremento industrial autosuficiente.

En cuarto lugar, deben considerarse, entre estas pautas, el compromiso de reinversión de utilidades y la política propuesta sobre transferencia de las mismas y repatriación de capitales. En el citado convenio Saab-Scania, para instalar una fábrica de chasis, camiones y ómnibus pesados en Tucumán, se logró un compromiso de reinversión de utilidades durante cinco años y de no transferencia durante los cinco años siguientes. Lo fundamental es que se obtuvo, sobre un proyecto en que la inversión extranjera alcanzaba los ocho millones de dólares, un compromiso de exportación durante cinco años, por sesenta millones de dólares; o sea, más de siete veces el monto de la inversión original. Esto da la idea no sólo del poder de negociación argentino, sino de la importancia que estas pautas de evaluación deben asumir en los contratos a que aludimos.

En quinto término, deberán utilizarse los recursos naturales o insumos producidos en el país, ya que debe agotarse hasta el máximo la posibilidad de aprovechamiento de la capacidad instalada en el país, especialmente cuando ésta responde al capital nacional.

En sexto lugar, se debe contemplar la medida y forma en que el mercado se encuentra atendido por empresas ya existentes.

En séptimo lugar, debe tenerse en cuenta la incorporación de la moderna tecnología al patrimonio nacional.

En octavo lugar, la suficiencia de la inversión para garantizar la evolución de la actividad que se destina, pues no es justo que la inversión extranjera no sea autosuficiente y que deba recurrir, por lo tanto, al mercado nacional interno para prever sus índices de explotación de mediano y largo plazo, los cuales deben estar integrados por parte de su aporte efectivo.

Y por último, las economías de escala derivadas de la inversión coadyuvan a permitir que el mercado nacional se integre en forma altamente productiva para el aprovechamiento del capital instalado en función de la magnitud de la radicación. Además, mediante una inteligente negociación, se podrá lograr la integración latinoamericana en la medida en que los capitales estén al servicio de los requerimientos del país.

El segundo aspecto fundamental son los límites de la inversión extranjera, los límites a las autorizaciones. De los límites establecidos en nuestro proyecto, que son dos, básicos y primor-

diales, el Poder Ejecutivo ha recogido el primero, que es la prohibición de que los proyectos de inversiones extranjeras contengan limitaciones de las posibilidades de exportar los productos que se elaboran por parte de la sociedad receptora.

La segunda prohibición, ya establecida en el convenio Saab-Scania, es el compromiso de pago por cualquier concepto de transferencia de tecnología de la sociedad receptora, que es la segunda parte que complementa el aporte de bienes inmateriales; esto es, que mientras se aporta efectivamente tecnología, no se puede remitir en concepto de *royalty* por tecnología al exterior, pues no se trata de un préstamo, de un arriendo o de una locación, sino que se trata de una compra efectiva, y de este modo terminamos con el drenaje de divisas.

Las cifras que me han suministrado en el Registro de Inversiones Extranjeras, surgidas de un procesamiento provisorio, dan cuenta de que a lo largo de la historia las inversiones extranjeras en la Argentina ascienden a cerca de dos mil millones de dólares, y que de esos dos mil millones habría, en concepto de transferencia al exterior, un 5 o 6 por ciento, cifra que es exigua. Lo que no está determinado aún, y que seguramente va a ser mayor, es lo que se ha pagado y se paga en concepto de *royalty* y de transferencia de tecnología, lo que constituye una verdadera sangría para la balanza de pagos del país.

Esto no se soluciona admitiendo la presentación de un proyecto de ley de tecnología dentro de 60 días, ni siguiendo las pautas típicas que establece la ley 19.151, que regula esta materia. Lo que debe precisarse, fundamentalmente, en una ley de inversiones extranjeras es la prohibición del pago de tecnología de la sociedad receptora al inversor extranjero, porque es un vínculo jurídico que debe deslindarse precisamente en esta materia.

También se establece un registro en el que deben inscribirse todos los que deseen acogerse a los beneficios de la ley de inversiones extranjeras: repatriar el capital y remesar utilidades.

Para no desvirtuar la teoría de la nacionalidad de las sociedades, que nos permite prohibir jurídicamente toda posible intervención extranjera en cuestiones argentinas so color de protección al nacional, en lugar de capital nacional y extranjero hablamos de capital registrable y capital no registrable.

El primero es el que puede acogerse a los beneficios de la ley, y el no registrable es el capital argentino, aunque esté en manos de extranjeros, porque si el extranjero es titular de una inversión en el país no goza de los beneficios de la ley de inversiones extranjeras, pues se lo considera un inversor nacional. Obsérvese que el interés del eventual titular del derecho no es aparecer como inversor argentino, que no

goza de ningún derecho, según la ley, sino de aparecer como inversor extranjero.

Establecemos luego el tipo de cambio para la registración de cada aporte, según la fecha de su radicación, para evitar que pueda perjudicarse la relación comercial internacional, a través de tipos de cambio distintos al momento en que se realiza la inversión y al momento en que pueda realizarse la transferencia.

Se precisa luego el régimen de los beneficios en cuanto a las utilidades realizadas, respecto de las cuales no establecemos un monto de remesas sino que se prevé en la ley que la proporción de utilidades que podrán transferirse y de capital que podrá repatriarse tiene que resultar, de los datos que ya obran en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que en pocos días más vamos a tener oportunidad de conocer en este Parlamento. A lo mejor ello nos da la pauta de que los porcentajes que se fijan en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo pueden ser demasiado altos o beneficiosos llegado el caso de que las utilidades de esas empresas no alcancen el nivel previsto en ese proyecto.

También es necesario prever con precisión el destino de las utilidades no transferidas, ya sea en la sociedad receptora o en el Banco Nacional de Desarrollo, coadyuvando de esta manera al proceso económico del país, o en una cuenta especial de reserva para las utilidades no remesadas que ingresen al capital de la sociedad receptora y que eventualmente puedan volver a aplicarse en el país en otros destinos.

Nuestro proyecto contempla así mismo la imposibilidad de que las sociedades receptoras de capital extranjero recurran al crédito bancario interno salvo para las necesidades de corto plazo o evolución y los créditos destinados a la financiación de importaciones. Esta prohibición es explicable porque estas sociedades no podrían colocarse en mejores condiciones que las sociedades de capital locales.

A continuación se configura un régimen de acciones y de transferencias para determinar las modalidades en que el capital podrá ser repatriado a través de la transferencia de acciones adquiridas que se registren, en cuyo caso la inversión continuará sujeta al control argentino, o bien, que no se registren, hipótesis en la cual tampoco tendrían cabida los beneficios reconocidos a la inversión extranjera.

Mantenemos, además, en nuestro proyecto, una previsión que ha sido eliminada en el del Poder Ejecutivo. Me refiero a la norma según la cual las sociedades receptoras de inversiones extranjeras deben mantener en las áreas de la gestión técnica y profesional un porcentaje mínimo promedio del 85 por ciento de argentinos. Ignoramos las razones por las cuales ha sido eliminada en el proyecto del Poder Ejecutivo esta cláusula que protege claramente a los técnicos argentinos, con lo cual se facilita que la dirección de estas sociedades receptoras esté a cargo

de extranjeros, cuando se trata precisamente de habilitar en forma idónea la tecnología argentina.

En nuestro proyecto se establecen, además, algunos recaudos que por su trascendencia no pueden quedar diferidos a la reglamentación. Me refiero, en primer lugar, a un régimen de amplia publicidad de la inversión y de la propuesta, siempre que no se perjudique el secreto comercial de los oponentes. Se trata de un régimen de verificación que permita contar con los recaudos necesarios respecto del origen extranjero de los capitales que se invierten. Discrepamos con el ingreso de capital argentino bajo la forma de capital extranjero, como ocurre frecuentemente con los bonos externos, con lo cual se desnaturaliza la aplicación de esos títulos, se transforma una obligación a largo plazo en otra exigible y, en definitiva, entra capital nacional con los beneficios del capital extranjero.

En nuestro proyecto prohibimos toda participación del capital extranjero en actividades de defensa y seguridad. En este sentido debe establecerse la necesaria intervención de los órganos competentes del orden administrativo argentino.

Se establece también un plazo de resolución a los efectos de que el Poder Ejecutivo se expida. Debe existir un criterio claro para decidir con prontitud los pedidos de radicaciones de capital, lo cual favorecerá el prestigio argentino en el orden internacional y dará seguridad a los inversores.

Establecemos un régimen de pérdida de derechos y sanciones que, con algunos matices, ha recogido también el proyecto del Poder Ejecutivo. Pero agregamos dos pautas fundamentales tomadas del convenio Saab-Scania, sobre las cuales quiero solicitar la atención especial de la Honorable Cámara, por cuanto el proyecto del Poder Ejecutivo ha tomado erróneamente la primera de estas cláusulas del convenio Saab-Scania.

Esta cláusula, de fundamental importancia para el caso de las empresas multinacionales y que de haber existido al tiempo de producida la quiebra de Swift, no hubiera permitido a Deltec verificar créditos como acreedora de sí misma, y que fue aceptada por Saab-Scania en el convenio de radicación, consiste en que la responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el convenio de inversión por el inversor extranjero será asumida en forma conjunta y solidaria por dicho inversor extranjero en proporción al monto efectivo de su aporte.

Y digo que ha sido tomada en forma confusa en el proyecto del Poder Ejecutivo, por cuanto en su artículo 31 dice: «La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el contrato de radicación por una empresa local de restitución de inversión extranjera, será asumi-

da en forma conjunta y solidaria por el inversor extranjero».

Esto de la responsabilidad de restitución no es un concepto claro. Debe hacerse referencia al conjunto de las responsabilidades incluidas en el convenio, porque al mencionarse la restitución no se sabe si se tienen en cuenta las utilidades, el capital o el todo. Es decir que se trata de un concepto vago y no determinado.

La segunda de las cláusulas, que reconoce algunos precedentes anteriores, determina que el derecho aplicable al convenio en forma supletoria ha de ser el derecho argentino; y los tribunales competentes, los tribunales federales argentinos.

Este es, en síntesis, el resumen de nuestro proyecto, y ahora podemos dar respuesta a la pregunta inicial de cuál es el marco en que se desenvuelve el orden público en materia de derecho de extranjería, tratándose de inversiones. El orden público en esta materia tiene algunos resortes fundamentales: la determinación de la radicación, precisa y técnicamente; el objeto de la inversión, que constituya un aporte real y efectivo que complemente el ahorro argentino; los modos de inversión, en los cuales tienen importancia los aportes tecnológicos para evitar la sangría de divisas al país; el sistema de registro, que permita dejar en manos nacionales el control de las empresas extranjeras; evitar el pago de contraprestaciones en concepto de tecnología, por las mismas razones aducidas al referirnos a la incorporación de bienes inmateriales. Y, por último, el sistema de la extensión de la responsabilidad que evite un nuevo caso Deltac, por cuanto el inversor extranjero es solidariamente responsable, en cuanto al convenio de inversión, con la sociedad receptora.

Estos principios, que nos toca analizar y que oportunamente han sido aplicados en el convenio de Saab-Scania, han sido tomados parcialmente en el proyecto del Poder Ejecutivo y constituyen el marco de orden público en materia del derecho de extranjería en lo que hace a inversiones extranjeras. Y han adquirido carácter institucional al inaugurarse una nueva política argentina, por cuanto constituyen la mejor defensa de los intereses del país y de la seguridad del inversor extranjero.

Por último, señor presidente, antes de finalizar mi exposición y a modo de contribución con la Honorable Cámara, deseo formular algunas observaciones a la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo, aparte de las ya mencionadas.

Ya hemos señalado que este régimen de empresas de capital nacional y empresas de capital extranjero por mayorías constituye un marco desalentador para la inversión, por cuanto el orden público queda deficientemente salvaguardado por el sistema de control propiciado. Debemos tener en cuenta que no interesa tanto la titularidad extranjera de inversión, sino que,

fundamentalmente, interesa el control del régimen de sus pagos al exterior. No interesa tanto si el titular es extranjero cuando el capital está nacionalizado, y esto es fundamental porque a veces, por desconocimiento técnico de la materia, algunos funcionarios han ignorado este aspecto preciso en el cual se ha llegado, en el orden internacional, a acuerdos entre los países inversores y receptores de capitales.

En el artículo 2º parecería conveniente redactar el inciso b) empleando la misma terminología y estructura temática del inciso c), ya que no se ve claramente en el primero de ellos quién sería el sujeto a que se refiere la frase «posean poder jurídico de decisión». Está claro en el inciso c), pero no en el b).

En el artículo 7º nos encontramos que la redacción se presta a varias interpretaciones no del todo claras. En primer lugar, se establece que se dará preferencia a las radicaciones a efectuarse en empresas con participación del capital nacional y extranjero y en empresas de capital nacional, sujeta a dos obligaciones: primero, transformación de la empresa en otra de capital nacional y, segundo, garantizar la exportación progresiva de su producción.

Obsérvese que la transformación de la empresa de participación de capital nacional y extranjero en empresa de capital nacional resulta factible. Lo que no se ve claramente es cómo obligar a una empresa a la que se considera de capital nacional a transformarse otra vez en empresa de capital nacional, es decir, de la misma naturaleza que ya posee.

Si lo que se quiso decir es que se daría preferencia a las radicaciones a efectuarse en empresas del tipo indicado en el artículo 2º, incisos b) y c), con respecto a las indicadas en el inciso a) de dicho artículo, dicha preferencia no debería estar condicionada en ningún sentido. Si, por el contrario, se trata de establecer una preferencia entre empresas del tipo de las contempladas en los incisos a) y b) respecto de empresas de la misma naturaleza, el condicionamiento sería lógico, pero la redacción del artículo debería reformarse.

El inciso f) del artículo 10 debería decir: «Se obliguen a la reinversión de las utilidades con derecho a transferencia».

En relación al artículo 15 que se refiere a la nacionalización de utilidades, señalamos que en virtud de la interrelación de las disposiciones de los artículos 2º y 3º del proyecto quedan perfectamente definidos los conceptos de capital nacional y capital extranjero.

Así mismo, mediante todas sus disposiciones, se instrumentan las reglas a las cuales deberán ajustarse. Sin embargo, el artículo 15 da origen a una figura cuya regulación parecería no encontrarse suficientemente clara. En efecto, el capital local, conforme a la terminología empleada en el proyecto, no participa de las características ni del capital nacional ni del capital

extranjero, ya que, si bien por una parte es de propiedad de inversores extranjeros, por otra parte se encuentra definitivamente radicado en el país, sin derecho a ser repatriado y sin posibilidad de ser transferidas al exterior las utilidades que en él se originen.

¿Cómo serán consideradas en ese caso las empresas de capital local? ¿Estarán o no sometidas a las prohibiciones establecidas en el artículo 6º? ¿Se verán o no alcanzadas por las restricciones al crédito bancario interno? ¿Podrán o no competir en igualdad de condiciones con las empresas de capital nacional cuando el Estado otorgue preferencia en ciertos casos a estas últimas respecto a la provisión de bienes o servicios determinados?

Evidentemente, dichos interrogantes deberán ser perfectamente aclarados mediante el dictado de normas que regulen específicamente la situación, los derechos y las obligaciones de las empresas de capital local.

Por último, señor presidente, oportunamente propuse, en la mesa de trabajo que se constituyó con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, la modificación de que el criterio del domicilio subordinado al asiento principal de los negocios establecido en el artículo 89 del Código Civil se atenga a la dirección y administración principal, que es el criterio del artículo 44 del Código Civil, largamente sostenido por la Argentina en el Congreso sobre Tratado de Derecho Civil y Comercial Internacional de Montevideo. Es la doctrina prevaleciente en el país desde hace muchos años y, por otra parte, permite identificar claramente la procedencia y el control de la inversión extranjera.

En síntesis, hemos procurado servir a la tarea de legislar sobre inversiones extranjeras con un proyecto claro e inequívoco, cuya elaboración nos llevó varios meses de trabajo, aun antes de acceder a la dignidad de este cargo. En el supuesto más probable de que esta Honorable Cámara, cuya comisión correspondiente no ha analizado el proyecto que presentamos, apruebe el del Poder Ejecutivo, nos permitimos recomendarle muy especialmente que adopte las modificaciones técnicas que propusimos, para compatibilizar con claridad su contenido. En esta materia, tanto como el orden público internacional del país está en cuestión una relación jurídica precisa y clara, en favor de ese orden público y de la seguridad del inversor extranjero.

Aspiramos, por último, a que, cualquiera que fuere la sanción de esta Honorable Cámara, el poder de decisión argentino en el orden internacional y la soberanía jurídica de nuestro país queden resguardados por el instrumento que apruebe el Congreso de la Nación. Sólo así podremos ofrecer un campo propicio y atractivo a la actividad del capital extranjero que, enmarcada en las normas que fijen el planeamien-

to y la voluntad argentinos, sirva para realizar el alto fin de promover el interés general y así lograr la salud y felicidad de nuestro pueblo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Moral.

Sr. Moral. — Señor presidente: declaramos con énfasis que si el bienestar del país ha de depender de la entrega, preferimos la pobreza con dignidad y altura antes que la ostentación, el boato y la facilidad con vergüenza y desprecio. No habrá pobreza y tendremos bienestar, tendremos progreso y tendremos dignidad si sabemos cumplir con nuestro deber, porque en muchas oportunidades durante nuestra historia, especialmente en los últimos años, con la tolerancia, la aquiescencia, la buena voluntad y aun el buen provecho de funcionarios e intermediarios sin moral ni decoro, la inversión apátrida se apoderó sin escrúpulos, sin vergüenza y sin conciencia de empresas, de esfuerzos y de sudores argentinos, a veces en forma solapada, con piel de cordero, y otras a cara descubierta, por el amparo que encontraba.

A los que somos discípulos de Lisandro de la Torre nos resulta fácil hablar de estas cosas y señalar posiciones, no sólo por el tan mentado debate de las carnes, sino también por la defensa de la yerba misionera, por la defensa de los silos argentinos en cooperativas, por la discusión de la ley en virtud de la cual se creó el Banco Central y muchos otros. En todos ellos tuvimos una posición clara y definida.

También decimos que, por supuesto, ha habido y hay inversores correctos, consubstanciados con el país, de buena fe, que han aportado y aportan esfuerzos para el crecimiento nacional. A éstos no los rechazamos.

De ahí que en esta materia podemos hablar sin prejuicios, porque no tememos a la inversión extranjera cuando viene con este destino. Tal vez le tememos más a los funcionarios o agentes que actúan en detrimento de los intereses del país y en beneficio del suyo propio, desvergonzado y vergonzante.

Deseaba hablar, señor presidente, un poco extensamente sobre los aspectos jurídicos de las inversiones extranjeras y sobre los aspectos económicos y financieros, así como de las facultades concurrentes del Estado nacional y las provincias, pero los hechos conocidos en la madrugada de hoy, y que se han exteriorizado en este recinto hace pocos momentos, producen una reacción que llega hasta el rechazo epidérmico. Para evitar algún exceso, no voy a efectuar esa exposición.

Sólo voy a señalar algunos aspectos que fundamentan nuestro despacho en disidencia, para que no queden dudas de nuestras intenciones, que no puede haberlas.

En algún momento se expresó que es escaso el porcentaje de los capitales extranjeros en relación con los capitales y ahorros internos que

hacen falta para nuestro desenvolvimiento. En este sentido deseamos aclarar que no es el aspecto cuantitativo el que nos preocupa sino la soberbia y la rapiña con que se desenvuelven esos capitales extranjeros.

No queremos, señor presidente, que queden dudas, ni ahora ni luego, sobre la actuación en esta materia de los funcionarios o agentes. Por eso observamos el artículo 4º, donde se vuelve a una práctica ya superada de contratos privados entre posibles inversores y el Estado. De ahí que nosotros proponemos un artículo 4º donde se establezca que las inversiones se harán en base a un contrato de radicación entre la autoridad de aplicación y los inversores extranjeros, contratos cuyos modelos y normas tipo deben ser públicamente conocidos.

Hacemos igualmente una observación al inciso i) del artículo 5º. No queremos, como ha ocurrido muchas veces, que pseudos inversores extranjeros se radiquen en el país y crezcan a costa de los créditos obtenidos en nuestro territorio o de otras medidas que les permitan acrecentar su patrimonio. Por eso proponemos que se agregue una norma según la cual deben garantizar una adecuada estructura financiera para cumplir con la evolución de la actividad a que se destinen.

Partiendo de este principio de que debe haber un contrato tipo que debe ser materia de aceptación por parte del Estado y del inversor, proponemos, así mismo, un artículo 10 bis, por el cual se autorizarán automáticamente las inversiones de aquellas empresas que exporten más del 66 por ciento de su producción o facturen el doble por ventas externas que por ventas dentro del país, ya que esto contribuirá al mejoramiento de nuestro balance de pagos. También se da una autorización automática a aquellas empresas o inversores que instalados en el interior constituyeran una reserva especial sobre sus ganancias, que serían distribuidas así: la mitad para obreros, proveedores y clientes, y el otro cincuenta por ciento para la provincia donde estuvieran radicados. De modo que en un plazo de veinticinco años esa empresa pasará a ser una empresa mixta, propiedad de la provincia, los obreros, los clientes y los proveedores.

Observamos también el artículo 17, entre otros a los que en el debate en particular habremos de referirnos. Para impedir que las empresas o inversores extranjeros utilicen indebidamente el crédito local —que en todo proceso de inflación resulta un verdadero regalo y subsidio—, se debe establecer una norma por la cual el Banco Central fije anualmente el interés real, a fin de que esos inversores no resulten subsidiados en la forma señalada.

Con respecto al artículo 18, allí deseamos que expresamente se señale que en ningún caso podrá otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que el que pudiera corresponder al inversor nacional.

Para cerrar este rápido comentario, y sin perjuicio de indicar otras observaciones en el debate en particular, también observamos el artículo 34. Su texto es correcto, pero no admitimos que deba declararse en esta ley que ella es de orden público y que integra dicho concepto el principio de respeto a los compromisos estatales.

El Estado argentino ha cumplido siempre y con honor sus compromisos. No necesitamos declararlo para que esto se sepa que es así. Nos duele que en una ley se incluya esta manifestación.

Hemos participado de este debate para afirmar nuestra total presencia en la sanción de la ley que controle las inversiones extranjeras, pero que no las rechace. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Odena). — La Presidencia desea señalarle que, de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria, este proyecto de ley se tratará en particular sin debate. De manera que las observaciones en particular puede formularlas ahora.

Sr. Moral. — No deseo extenderme, señor presidente. Lo más importante ya se ha dicho y consta además en el despacho de minoría. Lo demás son cuestiones de forma y de detalle. Lo fundamental ya ha quedado señalado.

Sr. Presidente (Odena). — Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Alvarez Guerrero.

Sr. Alvarez Guerrero. — De todo el conjunto de medidas remitido por el Poder Ejecutivo, el proyecto sobre radicación de capitales extranjeros es, quizás, el de mayor trascendencia y el de mayores implicancias directas en el proceso de liberación y cambio económico en que está empeñado el país. Exige, por lo tanto, un análisis signado por el problema de la dependencia.

Cualquier intento serio para producir un acelerado desarrollo económico y lograr una auténtica soberanía política y económica pasa entonces indefectiblemente por este tema de las inversiones extranjeras. En otros términos, es, en América latina, el tema de nuestro tiempo.

Esta exposición está, pues, enfocada en la incidencia que las inversiones extranjeras y la comercialización de la tecnología —tema éste lamentablemente omitido en todo el paquete— tienen en el marco de un proceso de liberación nacional y de acelerado desarrollo económico.

Adelanto la posición de la Unión Cívica Radical en este debate, en el sentido de que esta fuerza política comparte los fines generales del proyecto. Pensamos que es imprescindible y urgente contar con un instrumento legal que regule este aspecto fundamental de las relaciones económicas. Y el instrumento que se somete a consideración de esta Honorable Cámara es

en general adecuado, aunque parcialmente y en algunos casos muy parcialmente, a este objetivo.

No es cierto, como lo han afirmado las posiciones doctrinarias en materia económica de carácter liberal —liberal con los intereses argentinos; no con los del imperialismo extranjero—, que la inversión extranjera constituya en nuestro tiempo un aporte de recursos importante para un proceso de capitalización interna. La proporción que le ha correspondido en los últimos años al capital extranjero en la financiación de la inversión nacional ha sido mínima, cuando no negativa, desde el año 1967 en adelante. Como dijo muy bien el señor presidente del bloque radical en la sesión de ayer, la Unión Cívica Radical cree que el ahorro interno puede financiar el grueso del capital nacional argentino; pero ocurre que este ahorro interno no ha sido canalizado hasta ahora conforme a los grandes intereses nacionales y se ha distraído en los últimos años en actividades de especulación y de carácter financiero. Y la inversión extranjera, con ser negativa, con lo cual no es estrictamente inversión, ha sido distorsionante de un armónico desarrollo económico enmarcado en una política que atienda a los intereses nacionales y generales de todo el pueblo argentino.

Dadas estas premisas fundamentales, es preciso entonces un marco legal que controle, que seleccione, que prohíba en algunos casos y alienante en otros la inversión extranjera. El análisis de este proyecto tiende a averiguar si el mismo cumple cabalmente con estos objetivos.

Los antecedentes que se han tenido en cuenta, según los fundamentos del proyecto y según se informó, son básicamente la ley 14.222, del tiempo de Perón, y la resolución número 24 del Acuerdo de Cartagena, conocido como Pacto Andino. Ninguno de esos antecedentes es en realidad estrictamente adecuado a la actual experiencia y circunstancia argentinas.

La ley 14.222 respondió a realidades internacionales bastante diferentes de la actual, cuando el desarrollo del capitalismo monopolístico y de las empresas multinacionales tenía distinto matiz.

En cuanto al Acuerdo de Cartagena tiene por objeto intenciones también distintas de las de regular simplemente la inversión extranjera. La resolución 24 del Acuerdo de Cartagena suponía que los países miembros realizarían sacrificios para constituir un mercado común, y se trató de evitar que las empresas extranjeras pudieran beneficiarse de un mercado ampliado. De allí esa obligación general que el Acuerdo de Cartagena contiene para transformar en empresas mixtas o nacionales a las empresas extranjeras ya radicadas en los países del Pacto Andino. Esa necesidad de transformación en empresas mixtas no se justificaría, en términos generales, en el caso argentino, en su actual proceso de desarrollo. Deberá aclarar el Poder Ejecutivo en un plan económico, que ya debería

estar trazado, cuál es la política que el Estado desarrollará en materia de empresas mixtas o de sociedades anónimas de capital estatal.

Otros representantes de nuestra bancada harán el análisis en particular de las disposiciones de la ley que se estudia. Yo, señor presidente, quiero hacer referencia aquí a serias omisiones, muy importantes, de trascendencia, que exceden un simple error técnico y que implican peligrosos vicios en este cuerpo legal.

Este cuerpo legal habría que juzgarlo más por lo que no dice que por lo que realmente dice. En primer lugar, es imprescindible señalar con toda la voz y el alcance posible que la ley nada dice con respecto a los hidrocarburos y a la materia prima energética atómica. Se trata de dos rubros trascendentales, que son de importancia fundamental, para la Unión Cívica Radical, en un auténtico programa de emancipación económica.

En efecto, señor presidente, el artículo 6º del proyecto de ley, que en sus distintos incisos establece las prohibiciones de nuevas radicaciones, no prohíbe la intervención extranjera en materia de hidrocarburos y derivados y de uranio.

Temo, señor presidente, y se trata de una reflexión que surge de las discusiones mantenidas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que esta omisión es voluntaria; y la existencia en el Poder Ejecutivo nacional y en otros sectores del partido y frente gobernante de personajes directamente vinculados con el interés extranjero en materia de hidrocarburos hace válida esta sospecha.

A pesar de la justa indignación provocada por la nota enviada por la embajada de los Estados Unidos, no me preocupa tanto, señor presidente, cuando el imperialismo protesta estentóreamente; me preocupa más cuando él calla, y especialmente cuando introduce personeros disimulados tras las cortinas de los palacios gubernamentales o de los palacetes particulares, para influir directamente en la política económica nacional.

La Unión Cívica Radical no dejará pasar, de ninguna manera, cualquier intento que evite el recupero para la Nación, de la propiedad, explotación, exploración, refinamiento y comercialización de los hidrocarburos en todas sus etapas, por intermedio de YPF. Y denunciaremos con claridad que existen fuertes intereses, como han existido siempre en la historia argentina, directamente vinculados con las esferas de poder político, que pretenden seguir con la política de entrega energética y específicamente petrolera que ha llevado a herir la dignidad nacional y a encadenar su auténtica emancipación.

Otro aspecto de importancia, sería omisión sin duda, es el referido a la comercialización de la tecnología que, como se ha dicho por la Unión Cívica Radical, ha constituido un factor

decisivo en las distorsiones producidas por el crecimiento económico de la Nación.

No es suficiente el extraño artículo 38 introducido en el texto que estamos considerando. Este artículo es desde un punto de vista técnico-legal, poco ortodoxo, ya que deriva al Poder Ejecutivo una facultad del Poder Legislativo —la confección de un proyecto de ley sobre tecnología—, como reconociendo, en definitiva, la impotencia de este poder para elaborar el régimen legal acerca de una materia tan importante y tan trascendente para la economía nacional.

Este proyecto de ley de radicación de capitales extranjeros, sin duda alguna uno de los más importantes del paquete enviado por el Poder Ejecutivo, está íntimamente vinculado a un fenómeno muy particular y novedoso, que ha hecho aparición en nuestro tiempo y que define una característica en la relación entre naciones desarrolladas y naciones subdesarrolladas, entre naciones ricas y pobres. En nuestros días, las naciones ricas son las ricas en conocimientos científicos y técnicos, y las pobres son las que ignoran estas materias. Me refiero al ámbito de la tecnología, a su comercialización internacional.

Este aspecto de la comercialización de la tecnología no ha sido considerado por los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. Los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda hemos debatido en su seno, quizá con más amplitud que el propio texto del proyecto en discusión, el tema de la transferencia de tecnologías, lo que revela la importancia que la Honorable Cámara le ha dado a esta cuestión.

Se nos ha dicho por funcionarios del Poder Ejecutivo que el tratamiento legal del tema de la comercialización de la tecnología debía ser hecho con instrumentos independientes, que le dieran a la cuestión la prolijidad y la autonomía acordes con su trascendencia.

Se nos ha prometido el envío de este proyecto de ley, en el término de 60 días, pero es importante señalar aquí que nos preocupa sobremanera que, ya sea en forma conjunta con este proyecto de radicación de capital extranjero o en forma separada de él, como proyecto autónomo, no se haya establecido ni la política general ni los mecanismos que instrumentarán dicha política con relación a la importación de tecnología.

Es que el ámbito de discusión de este aspecto fundamental de la economía contemporánea, la oportunidad propicia para su consideración, es ésta, dedicada a la inversión de capitales extranjeros. Puede ser compartida o no la tesis de que ambos aspectos, la inversión directa de capitales y la inversión de tecnología extranjera, exigen tratamiento separado, pero no independiente.

Es imprescindible la consideración integral de la captación de inversiones y de la adquisición de tecnología en la medida en que, generalmente, esta última está implícita, incluida, en las

radicaciones de capital extranjero, pues es mediante las inversiones directas que las empresas multinacionales transfieren el conocimiento técnico, las patentes, el manejo y la venta de programas de asistencia técnica y las licencias de uso de tecnología.

La tecnología suele estar incorporada, en general, a los productos intermedios, a las maquinarias, a los equipos y a los manuales de operación y al envío de comisiones de expertos en asistencia técnica. Es difícil, por lo tanto, separar el mercado de la tecnología del de los demás factores de la producción a los que se encuentra integrado.

Debe quedar bien claro en este debate que el aporte substancial del capital extranjero en la República lo ha sido a través de la incorporación más o menos disimulada de tecnología. Y dentro de los pagos por tecnología que la Argentina ha realizado con los grandes centros exportadores de información en la materia y con las grandes empresas monopolísticas internacionales, los pagos por manejo y por asistencia técnica son aún mayores que los realizados estrictamente en concepto de regalías.

De tal modo que si legislamos sobre radicación de capitales extranjeros, y no lo hacemos sobre adquisición de tecnología, estamos legislando parcialmente, minimizando la parte fundamental del problema e ignorando lo que no se debe ignorar: en suma, estamos legislando mal.

Lamentamos sinceramente que el Poder Ejecutivo haya omitido este problema al remitir el proyecto de ley e intentaremos salvar esa omisión, aunque sea transitoriamente, mediante un agregado al texto del artículo 13 del proyecto en consideración.

Cabe anotar que el ingeniero D'Adamo, subsecretario de Economía, ha manifestado que la existencia de una llamada ley del gobierno de la dictadura militar, la 19.231, salva el problema porque es un instrumento útil. Sin embargo, ese argumento no es enteramente válido por varias razones: primero, porque el propio funcionario y otros señores integrantes de la comisión han expresado que este instrumento legal es incompleto y responde a una concepción liberal en materia económica; segundo, porque la vigencia de este instrumento es precaria, ya que se trata de una disposición de facto, cuya validez es discutida y negada; y tercero, porque aunque estas dos razones no fuesen suficientes, la llamada ley 19.231 tiene omisiones fundamentales, una de las cuales, de importancia incuestionable, es que nada dice la legislación actual, ni este proyecto que ahora consideramos, sobre los pagos de regalías o los pagos en materia de adquisición tecnológica que efectúan las filiales a las casas matrices, y la capitalización de lo que se llama el *know how*. Estos pagos constituyen formas encubiertas, diría moralmente fraudulentas, de traslado de utilidades.

Señor presidente, es preciso decirlo claramente, las transferencias de tecnología se producen en la inmensa mayoría de los casos por parte de casas matrices de empresas multinacionales a sus filiales en la Argentina. Si omitimos la consideración de este problema, si no ponemos alguna valla a esta evasión de capitales, las leyes que sancionemos sobre la radicación de capitales extranjeros serán leyes en el vacío, sin auténtico sentido liberador y sin concretas consecuencias prácticas.

Concretamente, hemos propuesto infructuosamente en la comisión —y lo reiteramos ahora— que se agregue al artículo 13 del proyecto en consideración el siguiente texto: «A los efectos del cómputo de las utilidades remitidas se incluirán los pagos efectuados entre casa central o matriz y sucursal o subsidiaria en la Argentina, o entre inversor extranjero y empresa en la que tenga participación radicada en el país, en concepto de regalías u otros pagos por uso de tecnologías».

Esta disposición es procedente, ya que no excluye la necesidad urgente de sancionar una completa legislación en materia de transferencia de tecnologías extranjeras, ya sea adecuando la política nacional en materia económica a la llamada ley 19.231, o bien sancionando una nueva. Es procedente, señor presidente, porque es coherente con el resto del texto del proyecto y no lo contradice, ya que se refiere a pagos por uso de tecnologías.

Sr. Díaz Ortiz. — A efectos de poder analizar el texto cuya inclusión solicita el señor diputado, me permito solicitarle que lo repita en forma más lenta.

Sr. Alvarez Guerrero. — Voy a hacer llegar el texto a la mesa de la Presidencia.

Sr. Presidente (Odena). — La Presidencia pondrá ese texto a disposición del señor diputado.

Sr. Alvarez Guerrero. — El proyecto en consideración, señor presidente, no solamente legisla sobre bienes de capital a invertirse por empresas extranjeras, sino que va más allá y contiene disposiciones federales sobre las utilidades y pagos a repatriarse al exterior, y vincula todo el ámbito de aplicación del instrumento legal a la balanza de pagos con el exterior.

Señor presidente: es imprescindible que algo insertemos en el texto legal en discusión con respecto a esta fuente de permanente evasión de divisas, como es el pago de regalías entre filiales y casas matrices. En caso contrario estaremos dejando manca y renga a esta ley, a la que tanta importancia debe dársele en el contexto general de la política económica argentina.

Finalmente, cabe consignar nuevamente la importancia que reviste encuadrar estos instrumentos en un plan global de desarrollo económico, que todavía no existe. El país está parado, desorientado en sus objetivos inmediatos y me-

diatos, y el gobierno tiene la obligación no solamente de pretender meros instrumentos, simples herramientas para gobernar, sino de marcar con claridad concreta cuál es el camino de liberación nacional prometido. Seguiremos esperando estas decisiones del gobierno y las empujaremos con todas nuestras fuerzas, afirmativamente, cuando ellas se pongan en marcha.

Ese ha sido, es y será, en definitiva, el único y auténtico compromiso de la Unión Cívica Radical. (*Prolongados aplausos.*)

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Señor presidente: deploro que, por la deficiencia de los parlantes y un poco por mi sordera parcial, no haya podido escuchar debidamente la exposición del señor diputado Balestra, a quien se lo conoce como a un entendido en la materia en discusión. Pero, de cualquier manera, el señor diputado Balestra ha actuado en este recinto como informante de su proyecto, que no era lo que estaba en discusión. Como no lo he escuchado muy bien no puedo formular aprobaciones ni observaciones.

En cambio, si fuera a seguir el plan que me había trazado, serían tales las coincidencias con el señor diputado preopinante que podría llegar a creerse que he tratado de copiarlo en la mayoría de sus expresiones.

Comparto con el señor diputado que ésta es una ley vertebral dentro del complejo de medidas económicas que nos ha enviado para su tratamiento el Poder Ejecutivo. Nosotros ya hemos dicho desde estas bancas de la Unión Conservadora que reconocemos el derecho del gobierno a fijar su política económica, y que haremos de acompañarlo si tiene éxito y también si fracasa en su aplicación.

Sin embargo, nos quedan algunos temores con respecto a este proyecto de ley que se perfila como una pieza legal bastante armónica. En cuanto a su redacción, creo que es una de las mejores leyes que se han presentado, y responde, ciertamente, a un claro objetivo, a un levantado objetivo. Pero tenemos temor de que con ella se logre el fin no querido en alguna oportunidad y pueda privarse a la Argentina de un capital útil y necesario, que sería dirigido hacia otras áreas con menores limitaciones.

No voy a señalar cuáles son los aspectos de la ley que provocan esos temores porque, en lo general, nos parece que es una ley que acierta en cuanto a una política y a una filosofía. Confiamos en que si en algún momento la experiencia indica que es conveniente rectificarla, moderarla o derogarla, el gobierno que tendrá la responsabilidad de manejarla como fundamental instrumento, aprenda la actitud que nosotros más de una vez elogiamos en los conservadores ingleses que tenían la ductilidad para rectificarse y hacer lo contrario.

En un acto de colaboración, he buscado al señor diputado Gualco, en su condición de miem-

bro informante, para conversar, pero no lo he encontrado. Trataré de hablar con él antes de la discusión en particular.

Nuestro partido va a proponer un agregado al artículo 20, como párrafo inicial, cuyo texto ya se ha hecho llegar al señor secretario de la Cámara y que también pondré en conocimiento del señor miembro informante. La preocupación que determina esta propuesta es que la ley de radicación de capitales es de acción y de previsión de futuro; pero en cambio, si es cierto que en estos últimos años nos han estado robando el país, la ley habría omitido la condigna sanción a los capitales que se introdujeron para manejar, sobre todo, los centros de seguridad, conducción y difusión de ideas.

Nos preocupa que no se haya previsto, por ejemplo, la adopción de una medida con un capital ya radicado que tenga relación con el sector del subinciso 1 del inciso c) del artículo 6º, relativo a la seguridad nacional, o con el del subinciso 4 del mismo inciso y artículo.

Como diputado conservador voy a economizar a esta Honorable Cámara la proposición de una nueva ley, relatando lo que le ocurrió a mi partido con un medio de publicidad masiva.

Nosotros tenemos una gran coincidencia programática con las leyes que han venido propuestas por el Poder Ejecutivo, y cuando digo nosotros me refiero a los titulados rebeldes del conservadorismo que en el año 1970 asumimos la conducción del partido y esbozamos nuestro ideario y nuestro programa bajo mi presidencia en el año 1971.

Había una pauta que no solamente decía que había que nacionalizar los capitales, sino que había que nacionalizar todos los medios de publicidad que estuvieran directa o encubiertamente en manos de capitales extranjeros. Y hay quienes han leído ese programa conservador rebelde y nos han querido sancionar en nuestro propio territorio, en nuestra propia casa. Voy a relatar el caso particular de un señor propietario de un canal de televisión, con genio quizá para análisis de la siquiatria, que asumiendo un tipo de soberbia muy particular de los testafierros de las grandes empresas, le devolvió a este diputado una carta que era simplemente un pedido de informes, escapando hasta de las leyes de la corrección y la decencia.

El señor Romay, que figura como propietario del canal 9 de televisión, que se dice argentino, negó sistemáticamente al Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires la pantalla por la que transmite publicidad al pueblo y por la que vende Coca-Cola, lo mismo que canaliza preceptos para hacer mansos y sumisos a los argentinos ante sus amos.

Los candidatos a gobernador y vicegobernador de mi partido fueron un día al canal, pretendiendo por una sola vez, sin fatigar ni exagerar exigencias, que este señor les brindara la liberalidad y prodigalidad de un espacio televisivo. El doctor Víctor Hugo Carrique y su

compañero de fórmula, el doctor Fonrouge, juntaron... tiempo en el lapso de dos horas y media en las antenas del canal y fueron despedidos, con la información de que no tenían cabida en espacios publicitarios tan importantes. Después de eso, no salió nunca la imagen de un conservador en lo que entendemos es un medio de publicidad argentino.

Pero hay algo más grave, por lo que acaso debía haber presentado una cuestión de privilegio en esta Cámara. A invitación de un periodista, a quien conozco muy bien y lo sé un hombre digno, que ha ejercido su profesión durante muchos años en la especialidad política y para bien de las actividades de esa índole, concurrí al Canal 9 de televisión de este señor de apellido Saúl, a un programa que se llamaba «Derecho a réplica». Cuando después de mucha insistencia me dieron la palabra, dije que en este país se sabe quién es el que va a boxear el día sábado, pero ningún ciudadano conocía a Luis Leloir hasta el día en que el mundo le reconoció su calidad científica. Después de verter mi punto de vista sobre el problema de las carnes, comuniqué a mi partido que había participado en ese programa, pero a la noche los señores del Canal 9 habían tomado la «precaución» de suprimir mi intervención, cortando la parte grabada en donde había expuesto mis ideas.

¿Cómo este medio de publicidad está dado en concesión por el Estado? Desde ya denuncié en el Parlamento que ha violado tal concesión. Pero, además, se presume que este canal de televisión pertenece a capitales extranjeros, a quienes parece que les disgusta e irrita la juventud conservadora argentina; y no se rían, me incluyo en la juventud, porque estoy en el eje de mi potencia espiritual. (*Risas y aplausos.*)

Por gentileza casi exquisita del señor diputado que hace pocos días me planteó una cuestión de privilegio, el doctor Marino, llega a mis manos la revista «Crisis», que en lo formal —según he podido ver— está muy bien redactada, pero que en lo substancial no podría abrir juicio sobre las afirmaciones que hace y las estadísticas que da. Esta revista dice que la televisión argentina, que es el medio más poderoso de publicidad, está en manos de empresas extranacionales, como la National Broadcasting Corporation.

Si queremos ser coherentes, si aspiramos a una enérgica y raigal política en beneficio de la personalidad nacional, no podemos admitir que los medios de publicidad argentinos se encuentren en manos de extranjeros o que permanezcan bajo el dominio y la férula de los capitales foráneos.

Esta no es una previsión alcanzada por el proyecto de ley sobre radicación de capitales, pese a que debe constituirse en una gran preocupación, porque una de las fórmulas más efectivas para influir, para obligar a pensar en una determinada cosa, para mandar, en síntesis,

para centrarse en el poder de conducción, es poseer un medio de publicidad, obtenido con la liberalidad con que han sido concedidos en la Argentina.

Por eso, el bloque de la Unión Conservadora va a solicitar al señor miembro informante de la comisión que en consulta, como corresponde, admita en la iniciación del artículo 20 el agregado de la siguiente prescripción: «Las radicaciones de capital extranjero anteriores a la sanción de esta ley, que se hallen directa o indirectamente invertidas en los sectores del artículo 69, inciso c), subinciso 1 (seguridad) y subinciso 4 (publicidad), podrán ser intervenidas por la autoridad de aplicación, la que determinará en su caso seguidamente la procedencia y conveniencia de su nacionalización.»

Voy a obsequiar a los presidentes de los bloques en el día de mañana o pasado, un pequeño cuadro con la siguiente leyenda: «No comparto tus ideas, pero daría mi vida defendiendo tu derecho a exponerlas.»

¡Que no exista ningún medio de publicidad, que quiera caracterizarse como argentino, que le niegue a un hombre que lucha y que piensa la posibilidad de decir para el pueblo y por los medios idóneos, aunque sea su error, porque su error también puede ser constructivo!

Y si ese aparato es extranjero, que desaparezca. Confiamos en que el gobierno lo pondrá imparcialmente en manos argentinas, para que así todos los ciudadanos podamos tener acceso a él, a fin de utilizar la publicidad como un medio de difusión de las ideas, imposición de una personalidad política y edificación de la cultura civil. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Sueldo.

Sr. Sueldo. — Los fundamentos de este proyecto y su orientación general son correctos; pertenecen a la categoría de los que suelen llamarse obvios. El país tenía que abordar esta materia y legislar en este sentido.

En cuanto a las observaciones particulares, el Partido Revolucionario Cristiano manifiesta su coincidencia con todas las objeciones formuladas por la Unión Cívica Radical; así mismo nos solidarizamos con la disidencia formulada por el señor diputado Moral, que encontramos profundamente razonable; y también expresamos nuestro apoyo al pedido de la Unión Conservadora que acaba de plantear el señor diputado Falabella.

Con respecto a este último punto cabe añadir una breve reflexión. El viejo tema de la libertad de prensa casi quema en este recinto. Desde que rige el artículo pertinente de la Constitución Nacional, parecería ser materia casi prohibida para el Congreso. Sé los mitos que existen al respecto; especie de callos mentales. Quizás alguna vez también habrá que plantearse este tema. Ahora simplemente quiero aportarle

al diputado Falabella la posibilidad de esta meditación.

Si es muy malo que un órgano cualquiera de difusión presuntamente extranjero —aunque lo sea en parte— limite o impida la libre difusión de las ideas a ciudadanos argentinos, y eso nos mueve a pensar en su nacionalización, es peor aún que eso suceda con bastante frecuencia por parte de otros órganos no sospechados de extranjeros, pues entonces se da la limitación del derecho entre nacionales.

No sé qué pensaría el señor diputado Falabella si a cualquiera de los legisladores aquí presentes se le ocurriera proyectar alguna medida legal que tendiese a asegurar la libre difusión de las ideas, más allá de la voluntad de los grupos económicos que dominan o influyen en los medios de difusión, aunque sean argentinos. El viejo precepto del artículo 14 («Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio... de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa») es menester interpretarlo en su alcance más amplio. Seguramente los constituyentes, y el propio Mariano Moreno en la época de «La Gazeta», no tuvieron jamás en vista, ni pudieron pensar que querían asegurar el derecho nada más que a los dueños de los medios, sino a «todos los habitantes de la Nación», como dice expresamente el precepto mencionado.

El tema de la libertad de prensa no debe considerarse únicamente con relación al poder político, que directa o encubierta y maliciosamente limite esa libertad a quienes posean o dirijan medios de comunicación. Más que individual, este derecho es profundamente social sobre todo en los tiempos actuales, por su enorme alcance, y por ello rige o debe regir para todos. Y como es una condición de la libertad para que sea real, que contenga igualdad de oportunidades, aquel derecho debe regir también en esa forma, con iguales posibilidades para todos. Dejo así planteado este tema como una reflexión, pero no es el caso de extenderme ahora en esta materia.

El motivo de este debate, referido a la ley de inversiones extranjeras, debe llevarnos, más allá del acuerdo en general y más allá de las diferencias particulares, a prever el futuro con respecto a lo que pueda producir la aplicación de esta ley. O sea que si atendemos a las advertencias que surgen de la exposición del señor diputado Balestra, propias de una mentalidad coherente, propias de un ángulo de enfoque típico en el país, tendríamos que plantearnos la hipótesis de que un instrumento como el que estamos considerando determinase una retracción grave de inversiones extranjeras en el país. Admitamos por un momento esta posibilidad en el porvenir económico de la Argentina. Más aun; yo pienso que eso puede ocurrir. El epi-

sodio que ha merecido general condenación de la opinión pública, relativo a la intromisión de la embajada norteamericana, más allá de su condenación, debe traernos a la realidad de que es muy probable que esta ley resienta y afecte los posibles caudales y las posibles corrientes de inversión foránea que pudiese necesitar el país aun en los sectores permitidos por este proyecto.

No estoy de acuerdo con esa eventual reacción, ni manifiesto por eso una reserva con respecto al texto de la ley, menos aun sobre su orientación. Creo que el espíritu debe ser unánime en cuanto a su sanción, pero sí corresponde advertir que frente a ese riesgo, que podría incluir medidas de hostilidad económica, como las que suelen adoptar las grandes potencias contra los países medianos o pequeños, que podría incluir bloqueos financieros y comerciales, prudente sería tener en cuenta cuál es el marco o el contexto global de la política económica que se va a desenvolver en el futuro y dentro del cual va a operar esta ley. O sea, como lo señalábamos ayer en ocasión de la discusión sobre la política económica en general, debemos fijar hacia dónde vamos, hacia qué modelo de sociedad y con qué espíritu se va a encarar todo el proceso, para saber el éxito que va a tener.

Si el nacionalismo correcto de este proyecto no es acompañado por un proceso de cambio de estructuras con sentido de socialización, con la creación de una mística nacional de lucha popular por la independencia económica y la transformación social, de participación directa del pueblo en las decisiones fundamentales, advertidos de que vamos a enfrentar ciertas circunstancias de guerra económica, temo que haya graves dificultades, que pueden llegar a ser insuperables. Porque el triunfo —digamos así— de este tipo de proyectos no cabe dentro de una economía que se mantiene en la estructura capitalista. Este es el gran reto que nos están lanzando las estructuras y las coyunturas actuales de la Argentina y del mundo, y el ansia de cambio de los pueblos y, especialmente, de los jóvenes, inclusive de los jóvenes como quiere serlo el señor diputado Falabella.

Es decir, señor presidente, si el conjunto de medidas en consideración derivase en la instauración de una sociedad de bienestar, de lo que se conoce como tal o sociedad de consumo, de un neocapitalismo, más o menos satisfecho, con líneas correctivas de desarrollo económico y justicia social y con arrestos nacionalistas, y no cambiase el signo fundamental del sistema, que es la exclusión de la inmensa mayoría de la población en la titularidad del gobierno de los resortes económicos, y esa inmensa mayoría sólo estuviese destinada a recibir mejores dividendos —digamos así— y no la participación en las decisiones; si los poderes económicos siguen concentrados en pocas manos, yo no veo qué mística

nacional se va a crear para enfrentar las graves encrucijadas del futuro.

Señor presidente: con esta advertencia reitero el apoyo del Partido Revolucionario Cristiano a esta iniciativa, y su solidaridad con las objeciones que se han efectuado en este recinto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Hueyo.

Sr. Hueyo. — El bloque que represento, con la intervención del diputado que habla, ha examinado en detalle el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, referente a las normas que regirán la inversión de capital extranjero en nuestro país.

En esta delicada y especial materia es bien conocida la posición de nuestro partido. Sus más altas autoridades de conducción han expresado que la inversión extranjera ha sido presentada a menudo como una manera de suplir una escasez de ahorro nacional que implicaría una traba a nuestro desarrollo.

Sin embargo, muchas inversiones de este tipo se han efectuado con crédito bancario, crédito de proveedores y con la instalación de financieras, transformando lo que se publicita como una inversión extranjera en un mecanismo de captación del ahorro nacional, que no era tan escaso como se presumía. Por ese camino se ha llegado al extremo de que el ahorro nacional fue utilizado para financiar transferencias de paquetes accionarios a poderosos grupos multinacionales.

El radicalismo entiende que la inversión de origen extranjero debe jugar un papel complementario del esfuerzo nacional, lo que implica un régimen selectivo que determine las áreas donde podrá desarrollar sus actividades y sus modalidades de participación. Así mismo, la plataforma radical habla claramente de la implantación de un sistema de control de movimiento de capitales y de limitar la transferencia de divisas a rubros que signifiquen contraprestaciones ciertas.

En estos momentos existen serias limitaciones por falta de disponibilidad de divisas, y es lógico inferir que ellas seguirán influyendo en el futuro. Sin embargo, es necesario que el sistema se racionalice, quitando los elementos de arbitrariedad que caracterizan al actual.

El proyecto sometido a consideración del Congreso abarca no sólo las normas que han de aplicarse a las nuevas inversiones de capital, sino que también comprende a las radicaciones ingresadas al país en virtud de cualquier norma vigente hasta la fecha y además prevé el régimen que corresponderá aplicar a los créditos externos.

Como resultado del análisis minucioso del proyecto por nuestro bloque, se han propuesto diversas modificaciones que tienden a precisar algunas disposiciones de su articulado y otras tendientes a brindar al Poder Ejecutivo y a la

autoridad de aplicación un conjunto de normas de mayor amplitud para considerar las radicaciones existentes.

Se procura, de esta manera, que pueda contarse con un instrumento legal que posibilite el estudio en particular de las adecuaciones de esas inversiones anteriores a la filosofía actual con respecto al rol que deben jugar las inversiones ya realizadas en el ámbito local.

En tal sentido, el ajuste introducido en las disposiciones correspondientes a las radicaciones anteriores, previsto en los nuevos artículos 20 y 22, respectivamente —ex artículos 19 y 21 del proyecto del Poder Ejecutivo—, permite a las inversiones extranjeras instaladas en el país elegir distintos caminos, ya sea mediante el pago de un impuesto especial a las transferencias en concepto de remesas de utilidades, o bien adaptándose a las normas de la nueva ley, en cuyo caso quedarían excluidas del impuesto especial.

En este aspecto, el diputado que habla había propuesto en forma expresa la posibilidad de que las inversiones del exterior ya realizadas sean exceptuadas del impuesto especial, siempre que las empresas acordaran con el Poder Ejecutivo la realización de un programa de exportaciones progresivas de su producción en el volumen y plazos a determinarse en el nuevo contrato de radicación a suscribir.

Cabe en este punto referirnos en forma especial al mentado problema que significa para los países en desarrollo las inversiones extranjeras cuyos centros de decisión ubicados en el exterior no contribuyen a promover el desarrollo de exportaciones industriales, ya que éstas vienen a resultar competitivas, en el mercado internacional, de las propias producciones realizadas en los países de origen de la inversión. Este proceder no armoniza, en modo alguno, con los esfuerzos realizados para orientar el desarrollo de exportaciones industriales, no obstante haber alcanzado el país una evolución que le permite su concurrencia al mercado mundial con productos procesados en plantas instaladas en el país.

El propósito de alentar en los nuevos contratos de radicación la posibilidad para tales inversores de mantener su actual estructura accionaria, siempre que se comprometan a realizar su programa de exportaciones, tiene, a nuestro modo de ver, un doble y positivo beneficio para el balance de pagos del país. En efecto, procuramos por esta vía un efectivo ingreso de divisas mediante los programas de exportaciones de empresas industriales de capital extranjero y, al propio tiempo, una economía de las divisas que se requerirían para la transformación de empresas extranjeras en empresas de capital nacional, o en empresas con participación de capital nacional y extranjero.

Nuestra idea, pues, está basada en que el centro de decisión de la empresa ubicada en el exterior debe cubrir el ámbito de la operatoria

interna de la empresa local en el que fue efectuada la inversión, pero en modo alguno ese centro de decisión puede controlar o substituir al centro de decisión de la política económica del país que, como es natural, debe quedar en manos del Estado, a fin de que los programas de inversión desarrollados mediante inversiones del exterior y los ejecutados por los propios capitales locales actúen armónicamente dentro de las bases programáticas trazadas por el gobierno para el desarrollo de la política económica que mejor convenga a los intereses generales del país.

En síntesis, la filosofía de este enfoque está basada en que las grandes inversiones de empresas multinacionales o internacionales puedan quedar en manos de ellas siempre que el centro de decisión, en lo tocante al accionar dentro del país, se ajuste a las normas que fije en la materia el gobierno nacional.

Con los ajustes introducidos en lo tocante a las normas a aplicar a las radicaciones anteriores, el proyecto brinda al Poder Ejecutivo nacional las armas necesarias para negociar con las empresas existentes su adecuación a lo expuesto precedentemente y al cumplimiento de las estipulaciones de la nueva ley de inversiones de capital.

Otros dos aspectos de singular importancia deben ser tenidos en cuenta en este trascendente tema de las radicaciones de capitales del exterior. Por un lado, las normas a que quedarían sujetas las transferencias de utilidades y, por el otro, el tratamiento a aplicar en materia de pagos en concepto de tecnología y regalías.

El primer punto ha sido tratado expresamente en la ley en su artículo 13, en el que se fijan los parámetros dentro de los cuales los inversores extranjeros podrán remesar sus utilidades en proporción a las inversiones realizadas.

El segundo punto, o sea el tratamiento de las retribuciones en concepto de tecnología y regalías, no figura en el proyecto de ley, pues se prevé el dictado de una ley especial sobre tecnología.

En cuanto a este último aspecto, en opinión de quien habla, puede anticiparse que en los casos de empresas de capital extranjero, que corresponden a radicaciones efectuadas por las casas matrices del exterior, en sus filiales locales, debería establecerse que no se admitirán pagos en concepto de tecnología y regalías.

Este criterio ha sido seguido, por otra parte, en las normas dictadas por el Grupo Andino en el tratamiento de las inversiones extranjeras.

En efecto, en el artículo 21 de la resolución Nº 24 dictada en diciembre de 1970 por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se expresa que las contribuciones tecnológicas darán derecho al pago de regalías, previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán computarse como aporte de capital.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera, por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá deducción alguna por este concepto para efectos tributarios.

Con estos argumentos dejo expuesta la posición de nuestro bloque con respecto a este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Rizo.

Sr. Rizo. — Señor presidente: una circunstancia realmente favorable se puso en evidencia en esta Honorable Cámara durante la sesión celebrada en el día de ayer y en la presente reunión. Digo esto porque en las voces de los representantes de las distintas agrupaciones políticas estuvo presente una situación que habla de justicia y que habla de reconocimiento del interior del país.

Todos los sectores políticos al considerarse la política económica argentina y al tratar, en el día de la fecha, los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, han hecho una justiciera defensa de los derechos que en general tienen las provincias argentinas.

Circunstancias como ésta me llevaron a esperar que la prensa, en sus distintas expresiones, hiciera resaltar este acontecimiento. Pero he visto que esa prensa o ese periodismo, que yo diría que es la entrevista diaria y constante con el país y con el mundo, no estuvo presente con sus grandes titulares en ese acontecimiento que decía mucho para el bienestar y para el futuro del interior del país.

Sin embargo, considero que se debe seguir teniendo la esperanza de que en esa palabra de aliento para las provincias argentinas esté presente el periodismo en sus distintas manifestaciones.

Ese hecho es realmente auspicioso y en mi intimidad palpita una emoción. Estoy seguro de que todos los hombres, todos los representantes de las provincias aquí presentes, también están emocionados. Ocurre que este enfoque federalista no ha sido defendido únicamente por los partidos provinciales, sino también por los distintos partidos tradicionales y nacionales.

Eso es muy importante e indica que la lucha no es difícil. Y no lo es porque en este conjunto de leyes vemos cómo una política orientada en el orden económico tiene especial cuidado de ese interés y de ese derecho de las provincias. En esta forma la lucha de los hombres del interior será mucho más fácil. No será un obrar unilateral, sino que se traducirá en un esfuerzo mancomunado.

Está en tratamiento el proyecto de ley sobre inversión de capitales extranjeros. En el sentido práctico, en ese sentido del interior del país, y teniendo en cuenta que se trata aquí de un obrar orientado por el Estado que nos da la

seguridad que ha de estar guiado hacia la felicidad del pueblo, debemos apreciar que esa estructura, cuando ya esté en pleno funcionamiento, habrá de llegar a Catamarca y a todas las provincias del interior como una verdadera realidad de desarrollo, como un auténtico estímulo para la instalación de industrias básicas que aprovechen sus distintos recursos naturales y como un remedio —digamos así— para hacer desaparecer definitivamente la desocupación que tantos perjuicios provoca en las provincias argentinas. Pero, fundamentalmente, creo que esa estructura funcional debe llegar al interior del país para que se concrete definitivamente algo que debe estar palpitante en todos los corazones y que es justamente brindar los medios necesarios para que la persona humana pueda realizarse en vida.

Cuando el pueblo argentino esté perfectamente realizado, tendremos provincias con personalidad y también realizadas. En ese sentido, todos hemos de abrazar con entusiasmo esa situación. El orgullo tiene que ser para todos, lo mismo que la tristeza. Ya en la forma práctica se ha demostrado que esa tristeza ha sido para todos y es por eso que, justamente, la voz del federalismo de los distintos sectores políticos se ha hecho escuchar.

Por eso diría, señor presidente, que al tratar este proyecto veo en él una organización estructural y, avanzando un poco más, a modo de reflexión, pienso que este proyecto es la estrategia para llevar a cabo un interés nacional, porque los hombres políticos que aspiran a servir al país tratan de captar el clamor popular y, una vez que lo han hecho, trazan sus estrategias, sus tácticas y sus medios operativos para poder cumplir con esa petición. Y considero que este proyecto viene a significar una verdadera estrategia para cumplir con un interés nacional.

Ese interés nacional ha sido tocado en distintas fases por situaciones de orden negativo; pero ya descubierto podría llegar más tarde la ubicación del interés político. No puede haber ubicación del interés político sin antes haber descubierto cuál es la del interés nacional, que puede estar rodeado por distintas corrientes, cada una con su estrategia para cumplir su objetivo. Pero allí viene la clarificación. Cuando ese interés nacional y popular se torna claro, queda claro también cuál es el interés contrario al país y a la patria.

Sr. Presidente (Odena). — Me permito advertir al señor diputado que ha vencido el lapso de que disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. Rizo. — Ya concluyo, señor presidente.

Así quedan reflejados los dos grandes sectores que a veces se forman en cada país. Pero el pueblo está convocado y se encuentra movilizado. El pueblo argentino se ha de dictar su destino y ha de volcar sus esfuerzos para cumplirlo. El otro interés luchará por lo antinacional.

Quiero destacar, mediante estas reflexiones, que el Movimiento Popular Catamarqueño ha de votar resueltamente a favor del proyecto de ley sobre inversiones de capitales extranjeros. (Aplausos.)

6

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

Sr. Pedrini. — Señor presidente: he pedido la palabra para plantear, en nombre de todos los señores diputados que componen este honorable cuerpo, una cuestión de privilegio por un hecho que es de dominio público, referido al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, señor Max V. Krebs, cuya postura y declaraciones no sólo son atentatorias contra la soberanía del país y afectan la dignidad del pueblo de la República, sino que también atacan los fueros de los representantes del pueblo argentino.

Voy a solicitar que se dé carácter preferente a esta cuestión de privilegio que planteo en virtud de las expresiones de este inaudito personaje, porque el honor de la patria y del pueblo argentino así lo exigen.

Sr. Presidente (Odena). — Se va a votar si la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Pedrini tiene carácter preferente. En caso afirmativo se la considerará sobre tablas.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Odena). — En consideración la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Pedrini.

Tiene la palabra el señor diputado Busacca.

Sr. Busacca. — Solicito que por Secretaría se lea el proyecto de declaración presentado en forma conjunta por todos los bloques políticos.

Sr. Presidente (Odena). — Así se hará.

Sr. Secretario (Rocamora). — El texto del proyecto de declaración es el siguiente:

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que ve con profundo desagrado la nota y los memorandos, de fecha 23 de julio, dirigidos al señor ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación por el encargado de Negocios de los Estados Unidos de América, señor Max V. Krebs, referidos a los proyectos de ley sobre inversiones extranjeras, re nacionalización de bancos y defensa del trabajo y la producción nacional que están a consideración del Honorable Congreso de la Nación.

Que ratifica la política de liberación económica en que está empeñado el pueblo de la Nación Argentina.

Que la República Argentina, respetuosa de la libre determinación de los pueblos, es una Nación independiente de toda dominación económica extranjera y no se halla sujeta a la órbita de influencia de ningún poder extraño.

Que en consecuencia repudia el contenido y forma de los citados documentos por constituir una intrusión inadmisibles en asuntos que son de exclusiva competencia de los poderes del Estado argentino.

Que considera que el encargado de Negocios de los Estados Unidos de América se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones a través de una actitud que resulta lesiva a la soberanía y dignidad nacionales.

Finalmente expresa su anhelo de que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios conducentes para declarar al funcionario norteamericano cuestionado persona no grata, y ordene su inmediato abandono del territorio nacional.

Ferdinando Pedrini. — Antonio A. Tróccoli. — Hector Raúl Sandler. — Carlos Raúl Insúa. — Horacio Jorge Sueldo. — Ricardo Ramón Balestra. — María Cristina Guzmán de Andreussi. — Francisco J. Moyano. — Federico S. Bravo. — Francisco José Palabella. — Marcos Merchensky. — José Armando Catalano. — Fausto J. Mombelli. — Eusebio Víctor Rizo. — Humberto F. Suárez. — Héctor Portero. — Clemente J. Colello. — Jorge D. Solana.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Busacca para fundar el proyecto de declaración, en nombre de todos los bloques y todos los diputados de la Honorable Cámara.

Sr. Busacca. — Señor presidente: el pueblo argentino —y nosotros con él— ha sido conmovido por la insólita intervención del encargado de Negocios de los Estados Unidos, quien entre consejos paternales, amenazas y pronósticos lúgubres nos intima, nada menos ni nada más, a seguir contribuyendo a su «destino manifiesto», poderío material y bienestar del pueblo norteamericano. Por supuesto que en esos requerimientos no hay una sola palabra sobre las obligaciones solidarias que la justicia internacional exige de este coloso en favor de los pueblos oprimidos de la tierra.

Parece mentira que una nación que pretende un papel preponderante en la conducción de los acontecimientos históricos no esté a la altura de las circunstancias, por carecer de aquella madurez indispensable para comprender los signos de los tiempos. Estos signos de los tiempos aparecen con una claridad meridiana. Es que ha terminado definitivamente la hora de los imperialismos, y ha surgido, irrenunciable e irreversiblemente, la hora de los pueblos. (Aplausos prolongados.)

Parece mentira que un país que busca el liderazgo de la humanidad y cuya visión de sus intereses debiera situarse a escala planetaria,